

Piñeiro, Diego E.. Capítulo III. En publicación: En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina. Diego E. Piñeiro. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.

CAPÍTULO III

LA UNIDAD ES UN CAMINO TRABAJOSO: EL MOVIMIENTO DE LOS CAMPESINOS EN PARAGUAY

Colección Becas CLACSO-ASDI. 2004. ISBN: 987-1183-08-9.

Acceso al texto completo:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/identidad/Cap31.pdf>

Fuente de la información: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe - CLACSO -

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN AGRARIA EN PARAGUAY

Para comprender la situación actual del agro paraguayo y de las fuerzas que aún disputan por la hegemonía de la cuestión agraria, es necesario y conveniente hacer una breve referencia histórica a la forma en que se constituyó la posesión de la tierra cuando Paraguay nacía a la vida como nación independiente.

Tanto bajo el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia durante las primeras décadas del siglo XIX, como bajo los gobiernos de los López en las décadas siguientes y hasta la década de 1870, el Estado Paraguayo ha sido caracterizado como “fuerte, patrimonialista, paternalista e ilustrado” (Campos, 1987). Durante el gobierno del Dr. Francia, este lleva a cabo una política de recuperación de las tierras que habían sido de la corona española, de las que habían pertenecido a los jesuitas, de las que habían pertenecido a la Iglesia, e incluso de las que pertenecían a un sector criollo acaudalado que se oponía a su política de refundación de un estado agrario, basado en el campesinado. En 1824 y años subsiguientes se dictan varias leyes mediante las cuales se conmina a los particulares a presentar los títulos legales sobre las tierras que detentan, estipulando que de no ser así estas tie-

rras pasarían a dominio del Estado. Dos años más tarde se estima que el Estado paraguayo se había apropiado de la mitad de las tierras de la región oriental del país (al este del río Paraguay) y de la totalidad de las tierras de la región occidental, conocida como el Chaco paraguayo. Las tierras de la región oriental fueron luego, en parte, arrendadas a campesinos a precios módicos y sin plazo definido con la condición de que las pusiesen a producir. Por otro lado estaban los montes de yerba mate, que vuelven a ser “ocupados por la población indígena y por los mestizos de sectores populares, proclamándose éstos propietarios de los mismos por derecho natural” (Campos, 1987).

De esta manera el Estado no sólo resuelve la cuestión del acceso a la tierra de los campesinos, sino que al mismo tiempo se asegura ingresos en metálico, en ganado y en especie que percibe como rentas por la tierra cedida. En un segundo momento, bajo el dominio de los López, será esta acumulación del Estado lo que les permitirá desarrollar una política mercantil y de incipiente desarrollo industrial, aún en una sociedad de definido perfil rural.

Este modelo de desarrollo será destruido por la Guerra de la Triple Alianza. Los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay, financiados por Inglaterra, terminarán con el incipiente desarrollo logrado por el Paraguay, con una política de desarrollo independiente y anti-librecambista. La guerra no sólo alteró profundamente el perfil demográfico de la nación, debido al exterminio de los varones, sino que también modificó la política económica y la distribución de sus recursos naturales. La libre navegabilidad de los ríos, negada por los López, y la destrucción de sus industrias, pronto incorporaron al mercado paraguayo al consumo de los productos manufacturados ingleses. La nueva Constitución promulgada en 1870 adopta los postulados del liberalismo y del libre cambio, inspirada en la Constitución y en otros textos legales de la República Argentina. Las tierras que habían sido confiscadas por los gobiernos anteriores fueron devueltas a sus antiguos dueños, y se sanciona una normativa legal –Registro General de la Propiedad y Código Rural– que legaliza y cristaliza la propiedad rural.

Por una ley de 1875 reforzada por otra posterior de 1883 se autorizó al gobierno a vender las tierras fiscales al primer denunciante, debiendo abonarse su costo en moneda metálica o en bonos de la Tesorería de la Nación. Si bien se respetaba el derecho de los ocupantes y arrendatarios de las tierras públicas a denunciar las tierras que ocupaban, de hecho ocurrió que el campesinado no tenía dinero para comprarlas. En cambio las tierras fueron denunciadas por una

naciente oligarquía nacional y por capitales extranjeros que eran a su vez poseedores de los bonos de la Tesorería emitidos para financiar la Guerra y su recuperación posterior. De esta manera, muchos de los campesinos pasaron a ser ahora arrendatarios de capitales privados que eran los nuevos dueños de las tierras. Esto ocurrió especialmente en las tierras próximas a los centros poblados, que fueron las que más demandaron los nuevos compradores por la posibilidad de disponer de la mano de obra necesaria para explotarla.

El capital extranjero, primordialmente anglo-argentino, se dirigió también a la compra de los yerbales naturales y de la inmensa riqueza forestal del Paraguay. Era la época del desarrollo de la industria del tanino para la curtiembre de los cueros y de la explotación forestal para producir los durmientes que se empleaban en la extensión de las vías ferroviarias. Un historiador agrario (Pastore, 1972) resume así la situación: “Al finalizar el siglo XIX estaban cumplidos los objetivos de la política económico-social iniciada en 1883: mas de 7.030 leguas cuadradas de praderas y bosques de quebracho del Chaco habían sido enajenados a 79 personas o sociedades [...] Cuarenta y cinco entidades en su inmensa mayoría organizaciones de capitales extranjeros adquirieron la riqueza yerbatera del Paraguay. Una de ellas la Industrial Paraguaya S.A. fundada en 1886, compró no menos de 855.000 has. de yerbatal natural y un total de 2.647.327 has. de tierras” (citado por Campos, 1987: 9).

Fue también en esa década del ochenta del siglo XIX que se fundan los dos partidos políticos del Paraguay la Asociación Nacional Republicana –Partido Colorado– y el Partido Liberal, que se alternarán en el poder durante el siglo XX. Estos dos partidos tienen en sus bases muy pocas diferencias ideológicas, y más bien representan intereses de fracciones distintas de la naciente oligarquía paraguaya. Las lealtades políticas serán construidas sobre la base de la posesión de la tierra: cada caudillo aporta las fuerzas de los votantes, que a su vez son los arrendatarios de sus tierras. Las relaciones de caudillismo basadas en el patronazgo, el padrino y el clientelismo dominarán la historia política del Paraguay aún hasta la actualidad.

Durante la primera mitad del siglo XX se dictan varias leyes: la Ley de Homestead, de 1918, que intenta devolver las tierras enajenadas a los campesinos por las leyes de 1883 y 1885; y la Ley de Creación, Fomento y Conservación de la Pequeña Propiedad Agropecuaria de 1926. Sin embargo, en la práctica esas leyes fueron inoperantes para revertir la aguda concentración de la tierra operada

en las décadas anteriores. Algunos pocos miles de hectáreas que fueron expropiadas y distribuidas a los campesinos en este periodo –predios de cinco a diez ha– reforzaron la estructura dual latifundio-minifundio. Las leyes de inmigración y colonización que se dictaron no tuvieron el impacto económico y social que tuvieron leyes similares en los países limítrofes, debido a la escasa infraestructura vial que impedía el traslado de los productos agrícolas de las colonias hacia los puertos y a la insularidad del país, que obligaba a la remisión de los mismos a través de los puertos de Buenos Aires.

La dependencia del Paraguay con respecto a la Argentina también se debió a que esta nación era la principal compradora de sus productos primarios. El amplio predominio del capital anglo-argentino que se había posesionado de las obras públicas, de muchas tierras productivas, de los yerbales naturales y de las riquezas forestales, comenzó a declinar a partir de la crisis del treinta y fue languideciendo en las dos décadas posteriores. En su reemplazo ya había una oligarquía nacional, muy vinculada al poder político, que se fue apropiando de las tierras, de los bosques y de la industria de transformación primaria.

La población campesina que producía los alimentos básicos de consumo popular se asentó en tierras propias o arrendadas en los departamentos centrales del oriente paraguayo: Central, Cordillera, Paraguarí, Caazapá y Guairá. Hacia mediados del siglo XX la subdivisión de la tierra, la erosión de los suelos y la multiplicación de la población campesina habían transformado a esta región en una fuente de permanentes conflictos por la tierra.

La segunda mitad del siglo comienza con la dictadura de Stroessner, que durará treinta años. La presión social campesina fue encontrando salidas de distintas formas. Por un lado, las migraciones temporales de trabajadores a las provincias limítrofes argentinas para las tareas de recolección de algodón y de otros productos agrícolas. Por otro lado, las migraciones permanentes de trabajadores, principalmente hacia Buenos Aires, para trabajar en la construcción y en el servicio doméstico.

La segunda válvula de alivio de la presión campesina fue la ocupación de tierras fiscales, ya que aún había frontera agrícola en los departamentos más alejados de la zona central. Ocupaciones organizadas o espontáneas, grupales o individuales que luego eran legalizadas por el Estado, que creaba “colonias” allí donde había habido ocupaciones. Sin embargo, forzados por la escasa disponibilidad de capi-

tal y por la propia política estatal al respecto, las colonias resultantes también estaban formadas por propiedades minúsculas de entre 6 y 20 ha. En realidad, una familia campesina librada a sus propias fuerzas y trabajando con herramientas manuales, sin maquinaria, tampoco tenía capacidad para ocupar productivamente extensiones mayores de tierra. La explotación que hizo de estos campesinos el capital comercial local (bolicheros, intermediarios), que les vendía los productos manufacturados necesarios para la subsistencia familiar, les financiaba el cultivo de algodón y les compraba la producción a precios irrisorios, y la propia posición hegemónica del capital industrial en el extremo de la cadena del complejo agroindustrial algodonero, impidieron cualquier posibilidad de acumulación de excedentes de este campesinado parcelario.

Esta estructura agraria dualizada recién comienza a modificarse hacia la década del setenta. Resumidamente consistía en grandes establecimientos ganaderos, los enclaves forestales y yerbateros y una extensa capa de campesinos minifundistas, que alternaban el trabajo en sus parcelas con la venta de fuerza de trabajo fuera del predio, en los establecimientos vecinos y aún a través de las migraciones laborales a países limítrofes²³.

Los gobiernos militares que se sucedieron durante veinte años en Brasil sostuvieron una geopolítica dirigida a disputar a la Argentina la primacía que había tenido durante un siglo, desde la Guerra de la Triple Alianza sobre el Paraguay. Para ello instrumentaron una serie de acciones que modificarían radicalmente las relaciones de fuerzas en esta parte del continente. El eje de esa política fue la construcción de la gigantesca represa de Itaipú, sobre el curso alto del río Paraná, en el límite entre ambos países. Es la represa más grande del mundo, con una capacidad de generación de 12.600.000 Kw, y se constituyó en una importante fuente de generación de recursos para el Paraguay, que le vende la mayor parte de la energía a Brasil. El impacto que la construcción de la represa generó en la débil economía paraguaya fue muy importante. Se estima que sólo el presupuesto de la obra durante 1975 sobrepasó el total de las exportaciones paraguayas de dicho año (Rivarola, 1981). Poco después se construyó la ruta

23 Como bibliografía para la cuestión agraria en el Paraguay, remitirse a los volúmenes editados por el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos que reúnen los números editados de la *Revista Paraguaya de Sociología*. "Pasado y Presente de la Realidad Social Paraguaya", Volumen III, La Cuestión Agraria en el Paraguay, Asunción, CPES, 2001.

entre Asunción y Foz de Iguazú, y desde allí la ruta que atravesando territorio brasileño conectaba con el puerto franco paraguayo de Paranaguá, que le daba a este país la ansiada salida al Atlántico. Estas y otras iniciativas consolidaron la presencia de Brasil como un importante aliado del Paraguay, desplazando la primacía argentina.

La construcción de estas importantes obras de infraestructura tuvo un importante efecto en la demanda de mano de obra, aliviando la presión que esta ejercía sobre el mercado laboral interno. Dinamizó la industria de la construcción, por la demanda generada no sólo por estas obras sino también por la construcción de viviendas y de distintas obras de infraestructura destinadas a asentar a la población que durante una década trabajó en estas obras. Modificó la imagen de los departamentos de la cuenca del alto Paraná, que ahora eran percibidos como los lugares dinámicos donde había trabajo y nuevas oportunidades laborales y empresariales. Elevó enormemente el precio de la tierra urbana y posteriormente el precio de la tierra agrícola (Rivarola, 1990).

Pero tal vez el impacto mayor fue en la modernización de la agricultura en los departamentos del este del país. En efecto, motivados por la diferencias de precios de la tierra agrícola en el Brasil (más altos) y en el Paraguay (más bajos) se generó una fuerte corriente de agricultores medios (tipo *farmer*) y de empresarios agrícolas de origen brasileño, que compraron muchas tierras para destinarlas a la producción de soja y de trigo. En muy pocos años, toda esta vasta región se transformó en la mayor zona de producción de granos del país. Los agricultores podían vender sus tierras en Brasil y comprar tierras en Paraguay, y aún les quedaba dinero para capitalizar sus explotaciones. Trajeron las maquinarias y los conocimientos agrícolas para poner en producción miles de ha. Para ello primero debieron transformar en tierras agrícolas superficies con montes, para lo cual emplearon también mano de obra paraguaya. Completada esta tarea, la mecanización de los cultivos reducía abruptamente la demanda de mano de obra local. La presión que ejercían los agricultores brasileños también produjo el desplazamiento de campesinos paraguayos, ya sea por la venta voluntaria de sus pequeñas parcelas o por las presiones legales e ilegales a las que eran sometidos para vender. De hecho, la “colonización” realizada por los agricultores brasileños ha sido una importante fuente de conflictos en el agro paraguayo, como se verá más adelante.

La superficie boscosa en los cuatro departamentos de la Región Oriental disminuyó en tres cuartas partes entre 1945 y 1976 (FAO, 1977,

citado por Rivarola, 1981: 178), mientras la producción de soja pasaba de 1.500 ha en 1961 a 357 mil hectáreas en 1980 (Rivarola, 1981). A esto se agregó la expansión del cultivo del trigo y de otros cultivos menores, como la menta, y otras hierbas medicinales y aromáticas. El cultivo del algodón a su vez no se restringió a la Región Oriental, sino que cubrió una amplia zona de cultivo también en los departamentos del centro del país y fue el cultivo de renta preferido de los estratos campesinos. La superficie cultivada paso de 47 mil hectáreas en 1970 a 258 mil hectáreas en 1980 (Galeano, 1993). La modernización agrícola provocada por esta colonización de origen brasileño fue parcial, en el sentido de que sólo se produjo en dichos cultivos, altamente mecanizada (el 54% de los tractores del país se concentran en esta región), con las tecnologías de la revolución verde, altamente contaminantes y dependientes de insumos importados, destructiva de los recursos naturales: de los bosques, y en consecuencia de los suelos. Además produjo desplazamientos de los campesinos radicados en dichas zonas, y demandó mano de obra en condiciones de precariedad laboral, destinada a derribar el bosque y a tareas estacionales ligadas a los nuevos cultivos.

Según Rivarola (1981), otra área de crecimiento importante en las décadas del '60 y del '70 se produce en la ciudad de Asunción y su periferia, motivada por varias acciones convergentes. Por un lado el crecimiento del propio aparato del Estado, localizado principalmente en la ciudad capital, con su funcionariado y los servicios que presta, que a partir de mitad del siglo XX va adquiriendo cada vez más funciones y que se convierte en un importante empresario al administrar los ferrocarriles, las comunicaciones, el transporte aéreo y fluvial, etcétera. Importantes planes de vivienda y el crecimiento del turismo, principalmente argentino, provocado por la diferencia cambiaria, también actuarán como dinamizadores de la actividad en el área central. Esta dinamización a su vez atrajo a migrantes rurales que se asentaron en la periferia de la ciudad, cumpliendo actividades en el área de servicios domésticos, turísticos, y principalmente en la venta ambulante y callejera. Esta migración también modificó el área rural próxima a la ciudad al elevar el precio de la tierra, demandada ahora para inversiones turísticas o de casas de fin de semana, o por emprendimientos agrícolas intensivos, como la horticultura forzada destinada a abastecer el mercado de la ciudad de más altos ingresos.

Hacia fines de la década del setenta y durante la década siguiente se producen varios hechos que señalan el agotamiento de este modelo de crecimiento. La finalización de la construcción de la repre-

sa de Itaipú y de las obras conexas libera un gran cantidad de mano de obra que apenas podrá ser atendida por la realización de la obra binacional argentina-paraguaya de la Represa de Yacy-Retá hacia fines de la década del ochenta. Esta población excedentaria presionará sobre las tierras agrícolas.

El Estado paraguayo instrumentó una política de desarrollo agrícola, por acción o por omisión profundamente dualista. En las palabras de un analista paraguayo, la acción del Estado se verifica a través de dos líneas de acción: "...una, tendiente a promover y afirmar un sector productivo de punta ligado muy directamente al mercado de exportación, y otra, la disposición del mantenimiento del amplio sector de pequeños productores, que así cumpliría funciones esenciales tales como la absorción de la sobrepoblada oferta de mano de obra campesina, el abastecimiento de los renglones alimenticios a bajo costo y una relativa estabilización de los niveles de salarios de la fuerza de trabajo no calificada" (Rivarola, 1981: 184).

La agricultura fue durante las décadas del setenta y del ochenta el principal motor del crecimiento de la economía. Durante la década del setenta creció a una tasa del 7% anual, y en la década siguiente, si bien bajó al 4%, se mantuvo por arriba de la tasa de crecimiento del PIB total. Empleó a la mitad de la fuerza de trabajo, y provee el 90% de las exportaciones. Las exportaciones agrícolas crecieron más de tres veces durante este periodo, lideradas básicamente por dos cultivos de exportación: la soya y el algodón. Mientras el primer cultivo se produce en empresas agrícolas modernas, el algodón es el principal cultivo de renta de la economía campesina. Durante la década del '90 las exportaciones de algodón se reducen a la mitad por una contracción de las áreas cultivadas y de los rendimientos. Esta reducción ha tenido un importante impacto en la profundización de la pobreza rural (Morley y Vos, 2000)²⁴.

Mientras la pobreza en las áreas urbanas mostró una tendencia leve a la disminución durante la década del ochenta, como consecuen-

24 Sobre el tema de la pobreza rural ver además Barrios, Oscar, "La Pobreza en el Paraguay: Distribución del Ingreso y Características Socio-Económicas", en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 37, N° 108 (mayo-agosto de 2000), pp. 95/108; Berry, Albert, "Las causas de la pobreza rural en América Latina y políticas para reducirla, con referencia especial para Paraguay", en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 36, N° 106 (septiembre-diciembre de 1999), pp.7/34; Galeano, Luis, "La exclusión social en el sector rural del Paraguay", en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 32, N° 94 (septiembre-diciembre de 1995) pp. 51/74; Rivarola, Domingo y Luis Galeano, "Los Pobres Rurales como Actores Sociales", en *Revista Paraguaya de Sociología*, Año 35, N° 102 (mayo-agosto de 1998), pp. 127/151.

cia del crecimiento dual mencionado más arriba, no ha pasado lo mismo en las áreas rurales. En el Paraguay “la mitad de la población es rural y la mitad de la misma es pobre. Mas de la mitad de estos pobres, entre 600.000 y 700.000 personas viven en la pobreza absoluta” (Morley y Vos, 2000: 28). Los pobres rurales se concentran en las explotaciones de menos de diez hectáreas, son guaraní hablantes, trabajadores independientes y analfabetos o con primaria incompleta (posiblemente analfabetos funcionales). Es decir, la concentración se produce en el grupo de campesinos con muy poca tierra. El incremento en los niveles de la pobreza rural registrados por algunos estudios entre 1980 y 1992 (cf. Sauma, 1993) es una consecuencia de la disminución del tamaño de las explotaciones, a su vez producto del cierre de la frontera agrícola y de la inacción del gobierno en materia de distribución de tierras, y de la caída de la producción de algodón. Esta a su vez es causada por los bajos precios en el mercado internacional, por el ataque de la plaga del gorgojo del algodón y por la disminución en la fertilidad de los suelos causada por la erosión. En este contexto, es muy posible que la pobreza rural se haya incrementado durante la década del ‘90. “Es de gran importancia política el hecho de que la divergencia entre las condiciones de los más pobres con respecto al resto continuó ampliándose (hasta 1995), en la medida en que la pobreza absoluta rural creció a una tasa significativamente mayor que la de cualquier otro grupo” (Morley y Vos, 2000: 37).

En materia de política de tierras es preciso señalar dos períodos: con frontera agrícola, y después de la finalización de la misma. Durante las décadas del ‘60 y ‘70 el Instituto de Bienestar Rural otorga tierras a 100 mil familias campesinas, siendo los departamentos de San Pedro y Caaguazú los que reciben mayor número de estas colonias (Galeano, 1993). Es posible reconocer dos procesos distintos en la ocupación de las tierras. En una modalidad, grupos de minifundistas y de campesinos sin tierras ligados entre sí por vínculos de vecindario o parentesco se movilizan para detectar tierras fiscales o con títulos de dudosa procedencia que estuviesen incultas. Una vez ubicadas estas tierras, los campesinos las ocupan logrando posteriormente el reconocimiento del Instituto de Bienestar Rural. En otra modalidad, son grupos de campesinos organizados y azuzados por fracciones del partido de gobierno o por caudillos locales, especialmente en etapas preelectorarias, los que invaden y ocupan tierras que han sido previamente sindicadas como fiscales u ocupables. En estos casos la acción de los caudillos se debe entender por su necesidad de extender y afianzar sus

redes clientelares, y su acción se comprende a la luz de las luchas entre fracciones del partido de gobierno. Pero lo importante de destacar es que las dos millones de hectáreas que se estima se distribuyeron en colonias campesinas durante estos treinta años, no obedecieron a un plan elaborado sino a las respuestas políticas circunstanciales de las presiones de los propios campesinos, y le sirvieron al régimen para reforzar sus bases clientelares. Por otro lado es preciso destacar que en el mismo periodo se distribuyeron cerca de cinco millones de hectáreas en grandes establecimientos, principalmente entre partidarios y familiares vinculados al partido de gobierno, “constituyéndose así un empresariado rural dependiente del Estado y marcadamente conservador, con dos fracciones claramente diferenciadas, la ligada al cultivo empresarial de la soja con tecnologías sucias y no sustentables y la fracción de latifundistas ligados a la ganadería” (Fogel, 2001: 51).

El segundo período acontece con el cierre de la frontera agrícola. La modernización agrícola experimentada por los departamentos de la Región Oriental, la colonización parcial en los departamentos centrales, y principalmente la compra y apropiación de tierras llevada a cabo por grandes empresas nacionales y extranjeras, atraídas por el bajo precio de la tierra, terminó con la frontera agrícola. Una prueba de ello es que entre 1975 y 1986 el precio de la tierra subió promedialmente en un 66%. Agotada la posibilidad de asentar campesinos en tierras libres, el gobierno no es capaz de estructurar una política de tierras coherente que permita continuar con el proceso de redistribución de tierras. La estructura agraria que se consolida es profundamente concentrada. Según el Censo de 1991, el 40% de las explotaciones tienen menos de 5 ha y ocupa el 1% de la tierra, mientras que las explotaciones de más de 1.000 ha, siendo el 1% del total, ocupan el 70% de la tierra. Esta distribución es aún peor que la detectada por el Censo de 1981, con lo cual se puede concluir que la persistencia histórica del campesinado ha ocurrido a costa de la subdivisión de las parcelas y la minifundización (Galeano, 1993).

Como consecuencia de este conjunto de situaciones convergentes –mayor minifundización, cierre de la frontera agrícola, aumento de la desocupación– en los años siguientes hubo una mayor presión de los campesinos, desplazados y ahora desocupados, sobre las tierras de dudosa legitimidad o utilización.

Ya en la década del setenta los campesinos se habían organizado en la Ligas Agrarias Cristianas protagonizando algunas ocupaciones, pero sobre todo impidiendo el despojo de tierras de comunidades

campesinas. Éstas fueron brutalmente reprimidas y desarticuladas por el gobierno dictatorial de Stroessner en 1976.

Hacia fines de la década del ochenta la dictadura stronista muestra señales de agotamiento. La alianza entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado que había sostenido al dictador será la que también lo derrocará. La crisis económica iniciada en la década del ochenta, al disminuir el aporte de recursos de los que aliados y partidarios del régimen podían disponer, también precipitó la crisis política. Primeramente es el Partido Colorado el que se divide entre los “militantes” sostenedores del dictador y los “tradicionalistas” proclives a una transición democrática ante la edad avanzada del mismo. Si bien los primeros logran posesionarse de la maquinaria del partido de gobierno, no logran hacer lo mismo con las Fuerzas Armadas, al punto que éstas terminan dando el golpe de Estado que derroca a Stroessner el 3 de febrero de 1989. Pero el hecho de que no hayan sido los partidos de oposición ni los movimientos sociales organizados los que forzaron la apertura democrática (sin desconocer el papel que ellas tuvieron en erosionar la legitimidad del régimen) concedió al proceso de apertura política un carácter particular, al punto que se lo ha denominado como una “apertura otorgada” (Galeano, 1993).

En los primeros años del nuevo gobierno éste se concentra más en las medidas de carácter político que en las de carácter económico o social. Así, los pasos más importantes fueron dados en materia de recuperar las libertades públicas y ciudadanas, y en la confección de un cronograma eleccionario y de una agenda política que incluía las elecciones presidenciales y municipales y la reforma de la Constitución. En cuanto a la agenda social, existía consenso en que los principales problemas se relacionaban con el desempleo, el acceso a la vivienda de los sectores populares, la reforma educativa y el acceso a la tierra para los campesinos. Muy poco fue lo que se hizo en los primeros años en torno a estos problemas, hecho que en especial en la cuestión de la tierra hizo arrear la conflictividad en el medio rural.

Las ocupaciones de tierra por parte de los campesinos ya habían venido ocurriendo durante los últimos años de la dictadura. Sin embargo, la caída de la misma y los nuevos aires de libertades civiles y políticas incentivaron nuevas ocupaciones. Así, entre principios de 1989 y fines del año siguiente ocurren 120 ocupaciones, de las que participaron alrededor de 20 mil familias. Además de la masividad de las ocupaciones, la novedad fue la intervención abierta de las organizaciones campesinas y su nivel de conflictividad. No fue ajena a ésta

la actitud de la principal entidad que nuclea los intereses de los terratenientes la Asociación Rural del Paraguay, que defendió virulentamente a sus asociados y llegó a alentar la constitución de un organismo paralelo –la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada– que repelió las ocupaciones con milicias armadas y fue sindicada como responsable de varios de los asesinatos de campesinos.

En los años inmediatos posteriores, 1991 y 1992, se percibió una desaceleración transitoria de las ocupaciones como consecuencia de varios hechos. Por un lado el debilitamiento de las organizaciones campesinas por divisiones internas y desencuentros ideológicos. Por otro lado, las organizaciones campesinas emplearon muchas energías en la participación con candidatos propios o apoyando candidatos de partidos reconocidos en las elecciones municipales y en las elecciones por la Constituyente, con resultados muy magros (Galeano, 1993). En tercer lugar, los terratenientes y la ARP dejaron de lado las actitudes más beligerantes al asumir una conducción de tendencia más moderada en esta institución. El gobierno, por su lado, habiendo prometido en la campaña eleccionaria una Reforma Agraria Integral, fue incapaz de llevarla a cabo y dejó en manos del IBR la instrumentación de una política de tierras que se limitaba a comprar las tierras ocupadas para repartirlas entre los campesinos, en algunos casos, y en otros a apelar al desalojo violento o negociado de los ocupantes.

LA ACCIÓN COLECTIVA

LOS ORÍGENES Y LAS LIGAS AGRARIAS CRISTIANAS

Hacia fines de la década del cincuenta el gobierno ya había decidido orientar el desarrollo del agro hacia la producción para la exportación, apoyando un modelo basado en empresas dedicadas a la producción agrícola–ganadera extensiva, ignorando la posibilidad de un desarrollo basado en la agricultura campesina. Esta opción alienta el interés de los ganaderos por la posesión de las tierras comunales que aún quedaban en poder de comunidades campesinas. En la comunidad de San Juan Ruguá, cercana a la localidad de Santa Rosa en el departamento de Misiones, los pobladores vieron una mañana que se estaba midiendo y cercando su campo comunal, con fuerte apoyo policial. Cuatrocientos veinte familias usufructuaban de dichas tierras en las que pastaban sus bueyes y demás animales.

Los vecinos del lugar, con el apoyo de los párrocos de Santa Rosa, decidieron reunirse para analizar la situación planteada y para

encaminar gestiones tendientes a solucionar el problema que se había creado. Pronto recibieron apoyo del Movimiento Sindical Paraguayo (MSP), que a su vez había sido fundado por militantes de la Juventud Obrera Cristiana. Con el decidido apoyo de los párrocos, del Obispo diocesano, y la orientación del MSP, se creó así la primera Liga Agraria Cristiana en 1960. Pronto el trabajo se fue extendiendo a otras localidades cercanas sobre la base de tres elementos aglutinantes: “los problemas de “poderosos” que quieren quitar sus tierras a los pobres; la esperanza en la fuerza de la unión, y la convicción de que la fe cristiana llega a los problemas concretos” (Equipo EXPA, 1982: 22)²⁵.

El hecho de que los campesinos reunidos en la primera Liga Agraria tuvieran éxito en impedir el cercamiento de su campo comunal mostró el camino de la unidad campesina, y pronto las Ligas de base se extendieron en Misiones y luego a otras regiones del país. También se vieron favorecidas por un cierto relajamiento del rígido control de la dictadura stronista y una parcial apertura política promovida por la Alianza para el Progreso y por las presiones y las donaciones del gobierno norteamericano. El hecho es que las Ligas del departamento de Misiones pronto se reúnen en la Federación Regional de Ligas Agrarias Cristianas (FERELAC), y cuatro años más tarde se crea la Federación Nacional (FENALAC), que agrupó a las federaciones regionales de Caaguazú, Concepción, Paraguarí, Cordillera y Misiones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados no se pudo evitar que se creasen dos Federaciones distintas: además de la mencionada FENALAC se creó también la Federación Cristiana Campesina, con un tinte más sindical y afiliada a la Central Cristiana de Trabajadores y al Movimiento Mundial de la CLASC. La FENALAC en cambio tenía una relación más estrecha con los sacerdotes y con los agentes de la Pastoral. Varios autores coinciden en que en realidad estas diferencias obedecían más a rivalidades entre los dirigentes que a diferencias de orientación, y que en las bases campesinas no se comprendían las razones de esta división. Posteriormente en 1971 se creó la Coordinación Nacional de Bases Campesinas Cristianas, que fue un intento de reunificar a todas las Ligas del país en una coordinación laxa sin eliminar a la Federaciones.

25 Equipo EXPA. *En busca de la “Tierra sin Mal”. Movimientos Campesinos en el Paraguay 1960-1980*, INDO-AMERICAN PRESS SERVICE, Colombia, 1982, pp: 22. Este libro es la mejor fuente para el estudio de las Ligas Agrarias Cristianas.

En la constitución de las Ligas tuvieron mucha influencia los propios cambios que se estaban operando en la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II, que impulsó a los sectores más progresistas de la Iglesia a hacer una “opción por los pobres” y a vivir su compromiso cristiano en profundidad, muchas veces conviviendo con los campesinos, labrando la tierra. El principal instrumento para construir la organización fue la educación campesina realizando cursos de base estructurados sobre la base de los ideales cristianos de la fraternidad y la solidaridad, recreando una metodología de educación para la liberación a partir de la propuesta de Pablo Freire. En dichos cursos los campesinos, guiados por religiosos o por otros campesinos ya capacitados, analizaban la sociedad en que vivían, analizaban las injusticias, buscaban sus causas en el egoísmo individual y en las estructuras opresoras del capitalismo, utilizaban lecturas y pasajes bíblicos para buscar en un cristianismo renovado los caminos de la caridad cristiana, y proponían respuestas que generalmente pasaban por organizarse para emprender acciones de carácter defensivo. Posteriormente las propuestas consistieron en modelos alternativos de producción y organización social (Galeano, 1991). Así se llegaron a organizar media docena de asentamientos campesinos con un núcleo urbano y las tierras trabajadas comunitariamente.

La concepción “basista” de la organización se reflejaba en las formas de organización interna. Las Ligas no contaban con dirigentes permanentes. En cada comunidad y para cada tarea o en cada reunión (local, regional o nacional) se elegía un coordinador y un secretario, cargos que se terminaban con el evento. En cada colonia se formaba una comunidad de base, que nombraba uno o dos delegados para concurrir mensualmente a una reunión de las comunidades de un pueblo. La Liga estaba formada por la unión de todas las bases de un mismo pueblo (Equipo EXPA, 1982: 25).

En las primeras etapas de las Ligas el objetivo era la organización de los campesinos para que tomaran conciencia de la situación de opresión en que vivían y que ellos buscaran las respuestas. Las Ligas también buscaban “la promoción de la justicia entre los hombres, en tanto la justicia expresara amor y caridad”. En lo económico se buscaba la socialización de la tierra y los medios de producción pero rechazando expresamente al comunismo “...queremos un socialismo nuevo impulsado por la fe y nuestra realidad” (Equipo EXPA, 1982: 28).

Sin embargo, los liguistas tuvieron gran dificultad para pasar de estos enunciados generales y de los grandes objetivos a medidas que les permitiesen definir propuestas más concretas para realizar los objetivos. Incluso se les critica que frecuentemente no supieron definir correctamente quiénes eran sus aliados y quiénes sus enemigos. Recién en la década del setenta, y particularmente en las Ligas de Misiones, se habría dado el paso de un movimiento pre-político a un movimiento político al lograr definir con mayor claridad las demandas y la identificación de los adversarios particularmente centrados en el Estado (Galeano, 1991).

Sin embargo, estas definiciones y otros errores les provocaron frecuentes y crecientes disensiones con la jerarquía de la Iglesia Católica, que gradualmente se fue distanciando del movimiento liguista. Finalmente ello facilitó la represión desatada por el régimen stronista en 1976, que apresó, torturó, asesinó y desapareció a los principales dirigentes, aniquilando con ellos a la organización liguista.

LA DÉCADA DEL OCHENTA: REORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO CAMPESINO

Las causas que habían dado origen a las Ligas, el proceso de concentración y de despojo de la tierra campesina por los ganaderos, la expansión de una agricultura empresarial excluyente, el deterioro de los recursos naturales, y la creciente minifundización, impulsaron en los años siguientes a los campesinos a continuar con las invasiones de tierras no ocupadas. “Entre 1983 y 1986 por lo menos 15 mil familias ocuparon fracciones no explotadas. Sólo entre enero de 1983 y agosto de 1984 las crónicas periodísticas refieren más de 30 invasiones que movilizan a aproximadamente 7.000 familias campesinas” (González et al, 1987:24; Zarza, 1988).

Es preciso introducir otros dos cambios con respecto a lo que había sido la organización campesina en las décadas del sesenta y del setenta. Por un lado el papel de la Iglesia Católica que, ya alejada del espíritu del Concilio Vaticano II y del Cónclave de Medellín, ha abandonado la teología de la liberación. No abandonó sin embargo la tarea de acompañar a los campesinos y de colaborar en su organización a través de la Pastoral Social, pero su acción tiene ya un matiz diferente al de la década del sesenta.

Por otro lado, es preciso dar cuenta de la aparición de numerosas organizaciones no gubernamentales (en adelante, ONGs) que, con

objetivos diferentes y desde posiciones distintas, emprenden la tarea de estímulo a la organización de los campesinos y de apoyo y acompañamiento a las organizaciones constituidas. Las ONGs tienen tres orígenes diferentes. Están las que derivan de la Iglesia Católica o de esfuerzos ecuménicos por atender necesidades no cubiertas. En segundo lugar están las que se forman a partir de la asociación de técnicos de distintas especialidades, que frecuentemente provienen de otras ONGs o del Estado, que confluyen en el interés de formar una institución propia. En tercer lugar están las instituciones que se forman como un desprendimiento de otras preexistentes, a veces en un proceso conflictivo (Palau, 1995).

La tarea de la Iglesia, de las ONGs, de las propias organizaciones campesinas que se irán formando, y de militantes de las ex-Ligas, explica un vasto proceso de formación de organizaciones de base campesina que gradualmente irán confluyendo hacia la constitución de organizaciones primero de carácter local y luego regional, para finalmente reconstituirse en la década del '80 como organizaciones de carácter nacional. En lo esencial esto significa que el régimen no pudo, a pesar de todo, terminar con el espíritu de las Ligas.

Hacia fines de 1980 varios dirigentes campesinos de las ex-Ligas y de la Juventud Agraria Cristiana crean el Movimiento Campesino Paraguayo. Esta es una organización que se declara libre de toda tutela "de partido político, jerarquía eclesial y/o del Estado, fundada... para luchar en defensa de los intereses gremiales y los derechos del campesinado nacional" (González et al, 1987: 30). El MCP se caracterizó por reclamar el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la represión contra los campesinos, el regreso de los exiliados y la libertad de los presos políticos. En 1983 fundó la Comisión Permanente de Familiares de Desaparecidos y Asesinados (CPFDA), que prontamente se ganó el reconocimiento por sus acciones. Al año siguiente funda la Asamblea Permanente de Campesinos sin Tierra (APCT) para agrupar y liderar los reclamos por la tierra. En los años siguientes apoyan las invasiones de tierras y comienzan a realizar concentraciones masivas de campesinos en reclamo por las tierras y por las libertades civiles. En 1985 crean la Coordinación Nacional de Mujeres Campesinas (CMC) con el objetivo de reclamar la igualdad de derechos de las mujeres en la sociedad y el respeto por los derechos del niño. La CMC realiza una primera concentración pública en Caaguazú con 700 mujeres, y poco después en la misma localidad el MCP realiza otra que logra reunir a 5 mil campesinos. En 1986 crean la Asociación de

Pequeños Productores Agrícolas (APPA) para promover la obtención de créditos, precios justos por los productos y canales de comercialización, y la Coordinación Juvenil Campesina (CJC), que aspira a nuclear a los jóvenes hijos de campesinos. Como se advierte, la estrategia organizativa del MCP apuntó a crear diversas organizaciones, posiblemente con el fin de dificultar el control y la represión de sus dirigentes (González, 1987).

Hacia mediados de la década del ochenta el MCP contaba con diez regionales en los departamentos de Caaguazú, Kanindeyú, Alto Paraná, Concepción, San Pedro, Itapúa, Misiones, Central, Guairá y Paraguarí. Cada regional a su vez está formada por una cantidad de organizaciones de base que están constituidas generalmente a nivel de la colonia campesina o de la comunidad.

Por otro lado, desde principios de la década del ochenta, con el apoyo de la Pastoral Social de la Iglesia Católica y de numerosas ONGs, se fueron creando organizaciones de agricultores que luego se fueron nucleando en Organizaciones departamentales y en Coordinaciones Regionales. En 1986, diez organizaciones de carácter departamental o regional, advirtiendo que tenían puntos en común, acordaron crear una estructura que las federase. Así nació la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA), que poco después contaba con 300 comités de agricultores que eran las bases de las diez organizaciones que la conformaron. La diversidad de orígenes y de estrategias de cada organización constituyente planteó una de las dificultades de la nueva Coordinación. Pero por otro lado esta diversidad también constituyó su riqueza, y le permitió acoger puntos de vista y estrategias diferentes, lo que le dio mayor flexibilidad. Desde el inicio se caracterizó por inclinarse más que el MCP hacia los proyectos y emprendimientos de carácter productivo y a la preocupación por las cuestiones vinculadas al crédito agrícola, la comercialización de la producción campesina y el abastecimiento de insumos (Villagra, Casaccia, Ayala, 1989).

En 1986 se crean dos organizaciones más de menor importancia. La Organización Nacional Campesina está formada por varias organizaciones de distinto nivel: organizaciones zonales, una organización de asalariados rurales y otra organización de nivel comunitario. Su orientación la llevó a vincularse al sindicalismo cristiano, afiliándose a la Federación Campesina Latinoamericana. La Unión Nacional Campesina "Oñondive Pa" fue creada por un líder campesino independiente a partir de una campaña que emprendió para esti-

mular a los campesinos a no plantar algodón, volcando sus esfuerzos a plantar para el autoconsumo.

El peso organizativo de cada una de las organizaciones de nivel nacional se aprecia a partir del cuadro siguiente.

CUADRO 3
*MIEMBROS DE GREMIOS CAMPESINOS (1989)**

Organizaciones	Nº de Comités	Nº de Familias
CONAPA	374	5.154
MCP	183	1.945
ONAC	95	720
UNC	100	380

Fuente: J. C. Rodríguez, "El gremialismo campesino", CDE, *Informativo Campesino* N° 10, julio de 1989.

* Estimaciones del autor. Citado por Luis Galeano (1991).

Las diferencias entre el MCP y la CONAPA no eran sólo de tamaño. También tenían diferencias de carácter organizativo e ideológico. El MCP siempre alentó una posición más crítica a la estructura social vigente y a las relaciones de poder en la sociedad. Sus posturas eran reivindicativas, dirigidas a promover un cambio social y político. La dirigencia se apoyó en "una ideología de corte clasista de izquierda. Ha sido la utopía de la sociedad socialista y colectivista el sustrato social básico". En cambio, la CONAPA, sin dejar de lado las reivindicaciones dirigidas al cambio de sociedad, más bien hacía énfasis en demandas económicas dirigidas a la solución de los problemas más inmediatos de sus bases campesinas (Galeano, 1991: 460).

En 1988, las luchas entre las dos fracciones del Partido Colorado, los "tradicionalistas" y los "militantes", llegan ya a provocar divisiones en el Ejército, y a principios del año siguiente se produce el golpe liderado por una fracción del Ejército, aliada con el sector político de los "tradicionalistas". Las organizaciones campesinas interpretaron la caída de la dictadura como una señal para iniciar los cambios que reclamaban desde hacía décadas en la estructura fundiaria. Así, los años siguientes están marcados por numerosas invasiones tanto de tierras públicas como privadas. La mayoría de estas invasiones eran espontáneas, o al menos sin una organización campesina que las respaldase. Para unificar la lucha de los Sin Tierra se creó la Coordinadora Nacional de Lucha de los Sin Tierra y la Vivienda. Esa

organización llegó hasta 1993, cuando se dividió. Por un lado, la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) se afilió a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC); por el otro, la Coordinadora Interdepartamental de los Sin Tierra que tenía sólo alcance regional: tuvo una existencia fugaz y se convirtió en la Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte, con 14 asentamientos y una propuesta de trabajo colectivo de la tierra.

La nueva situación política y el recrudecimiento de la lucha por la tierra también producen cambios al interior de las organizaciones campesinas. La CONAPA, que se había caracterizado por una línea de acción que ponía énfasis en la realización de proyectos de tipo productivo, comienza a ser modificada por la misma práctica social de sus bases, que se involucran cada vez más activamente en la lucha por la tierra, orientándose a la exigencia de la Reforma Agraria. Incorpora como principio organizativo la autonomía y la independencia de la organización, y pone más énfasis en la movilización como método de lucha para conseguir tierras. Poco tiempo después elabora un proceso de conjunción y unificación de las organizaciones que la integran, y se transforma en la Federación Nacional Campesina (1993) (Bareiro, 2001). Según un analista, no fue ajena a este proceso la incorporación de varios de los dirigentes campesinos al Partido de los Trabajadores de tendencia troskista (Galeano, 1991).

La división de las organizaciones campesinas, y la existencia de múltiples organizaciones de nivel nacional, regional o local, siempre constituyeron una debilidad del movimiento campesino. Presionado por sus bases y por las organizaciones sociales aliadas, el movimiento campesino inició un proceso de convergencia. El motivo para ello fue la crisis de la producción de algodón a partir de la campaña de 1993. Los precios del algodón, que ya eran exiguos, sufren un deterioro en los primeros años de la década del '90, precipitando una crisis económica del campesinado, que es su principal productor. Estos, viéndose imposibilitados de recuperar las inversiones y el trabajo aportado, tampoco pueden devolver los créditos que el Estado les había otorgado a través del sistema de comercialización, como era habitual. Se inició entonces una campaña liderada por la FNC para obtener del gobierno la condonación de las deudas. Esta campaña cobró una inusitada fuerza, y empujó a las dirigencias campesinas a buscar la unidad de acción. Se creó así la Coordinadora Interdepartamental de Organizaciones Campesinas (CIOC), que en sus primeras instancias logró reunir a todas las organizaciones campesinas del Paraguay. Esta

organización realizó una marcha hacia la ciudad de Asunción en marzo de 1994 que movilizó a veinte mil campesinos y prácticamente ocupó la ciudad, obligando al gobierno a recibirlos y a escuchar sus reclamos, basados en la demanda concreta de la condonación de las deudas y en cuestiones más generales que tenían que ver con la lucha por la tierra, la salud, la educación.

Ese mismo año, una asamblea de delegados de las organizaciones participantes le cambió el nombre y se transformó en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). La integraron organizaciones de carácter nacional como la FNC, la OLT, el MCP, la ONAC, la UNC, junto con organizaciones de carácter regional y de carácter local, hasta constituir una veintena de organizaciones. Esta organización, que coordinó unitariamente las acciones de las diferentes organizaciones campesinas, se mantuvo hasta 1998, en que se procesó una nueva fractura. El enfrentamiento se produce entre los dirigentes de la Federación Nacional Campesina (FNC), del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT). El motivo fue una disputa por la táctica a llevar a cabo en la movilización, conocida como Marcha sobre Asunción, que se produjo en ese año. Sin embargo, también había divergencias de tipo programático y político. La FNC había ido profundizando su propuesta y sus enfoques, proponiendo cambios en la política económica y cambios de carácter estructural. En ese año llevan a cabo en Asunción un debate de tres días de duración con dirigentes campesinos, profesionales de distintas vertientes y miembros de partidos políticos con y sin representación en el Parlamento, sobre el problema agrario y el problema campesino. La FNC propuso un Documento de Base titulado “Un Programa de Reactivación Productiva Nacional” que se fue enriqueciendo y mejorando con los distintos aportes a lo largo del seminario. En su transcurso se evidencia que cerca del 80% de los pequeños y medianos productores estaban endeudados con los organismos financieros del Estado. Entonces se lanza un Plan de Lucha por la Condonación de las Deudas y por la Reactivación del Aparato Productivo. Lo notable de la propuesta de reactivación productiva es que, en el caso del agro, está basada en el fortalecimiento de la producción algodonera con la propuesta de industrializar al menos el 30% de la producción nacional por la industria paraguaya. Es de remarcar que la producción algodonera, si bien es el principal cultivo de renta campesino, luego de llegar a un máximo de 600 mil tn durante la campaña ‘89-‘90,

decreció durante la década del noventa hasta situarse en la 200 mil. Influyó en este decrecimiento un conjunto de factores: bajos precios a nivel internacional, fuertes ataques de plagas, dificultades por la distribución de semillas en mal estado, falta de financiamiento estatal, agotamiento de los suelos, etcétera. La propuesta de la FNC consiste en señalar que el problema no es de la producción de algodón, sino de las políticas estatales que han desalentado su cultivo y alentado el prebendarismo y la corrupción entre los campesinos, los técnicos del Estado y el aparato de comercialización e industrialización que expolia al campesinado. Si estas cosas se cambiasen, la producción y la industrialización del algodón podrían volver a ser un rubro rentable para los campesinos²⁶.

En lo político, la FNC y sus aliados se declaran marxistas-leninistas y crean un Movimiento Político, paso previo a la constitución de un partido político, al que denominan Paraguay Pyahurá. El Movimiento es lanzado con motivo de la Marcha hacia Asunción de ese año sin que la decisión hubiese sido comunicada a las demás organizaciones campesinas, que se encuentran frente al hecho consumado. Esto sumará a los motivos de ruptura. Dos organizaciones campesinas regionales muy importantes, Coordinación Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI) y Asociación de Agricultores de Alto Paraná (ASAGRAPA), que tienen dirigentes afines al Partido de los Trabajadores, se desprenden de la FNC y se reafilian a la MCNOC (Fogel, 1986).

Las entidades agrupadas en la MCNOC no coincidieron ni con el diagnóstico ni con la propuesta programática productiva de la FNC. La MCNOC tiene un enfoque en el cual se estima que la lucha de las organizaciones sociales contra la corrupción y el actual estamento político que gobierna el país durará aún diez o quince años más²⁷. Por ello impulsan, en lo agrícola, un modelo basado en la autosuficiencia alimentaria campesina. En su análisis, el impulso a cualquier cultivo de renta tiene hoy pocas posibilidades de generar excedentes entre los campesinos como consecuencia de la poca tierra que cultivan y de las injustas estructuras de comercialización y distribución de la renta. Por ello impulsan la producción alimentaria para la autosubsistencia, la generación de pequeñas agroindustrias, la artesanía, y todos aque-

26 Ver el Documento de la FNC "Por la Producción y la Industrialización del Algodón", Federación Nacional Campesina, diciembre de 2001, 121 págs.

27 Ver entrevista a José Parra, dirigente de la MCNOC, en el diario *La Nación* del 2 de junio de 2002, realizada por el periodista Roque González Vera.

llos emprendimientos económicos que permitan que los campesinos retengan una porción mayor del excedente generado. Como consecuencia de las marchas campesinas programadas en el mes de marzo del 2000 por la MCNOC, el gobierno firma un acuerdo con dicha organización por la cual se compromete a desarrollar en forma conjunta un programa de financiamiento de 12 millones de dólares con los siguientes fines: 2,5 millones para la compra de tierras a través del IBR para distribuir entre campesinos sin tierra; 6,4 millones para financiar proyectos productivos, inversiones sociales y seguridad alimentaria; 3 millones para proyectos productivos en el departamento de Cordillera. Además, el gobierno se comprometió a atender las necesidades crediticias de los pequeños productores, a dotar a viejos y nuevos asentamientos con la infraestructura necesaria para su buen funcionamiento, a atender las demandas de tierra, etcétera. Para operativizar estas acciones crea una Comisión formada por representantes del gobierno y por delegados campesinos. Sin embargo como luego lo reconocerá la dirigencia campesina, tres años después apenas se había desembolsado el 20% de lo prometido²⁸, y muy pocas de las acciones previstas se habían llevado a cabo. Como era esperable, este acuerdo fue duramente criticado por la FNC y sus aliados, quienes atribuyeron a este acuerdo una disminución en la combatividad de la MCNOC. Desde otras perspectivas, se ha hecho notar que el manejo de los proyectos y del dinero involucrado han generado sospechas y denuncias de corrupción hacia algunos dirigentes, y que la MCNOC ha hecho mal en involucrarse en una actividad compleja y para la cual los dirigentes no tienen la capacitación suficiente (Fogel, 1992).

En resumen, y en cuanto a lo que importa para el análisis de las acciones del Movimiento Campesino entre 1997 y 2000 que se realizará en las páginas siguientes, importa retener dos aspectos. En primer lugar, que en estos años ocurren cambios y realineamientos de fuerzas, en un proceso muy dinámico, como consecuencia de la adopción de definiciones políticas y de procesos de consolidación de las organizaciones. Procesos que son más fuertes cuanto más poder van cobrando las organizaciones campesinas. En segundo lugar, que las dos organizaciones principales en este período son la FNC y la MCNOC, cuya constitución es la siguiente.

28 Entrevista realizada por el autor a Belarmino Balbuena, dirigente de la MCNOC, 12 de septiembre de 2002.

La FNC tiene como aliados a la ONAC y al Movimiento Juvenil Campesino Cristiano, y en estos años procesa una evolución que lo lleva a crear el Movimiento Paraguay Pyajurá como brazo político, y a reabsorber en una sola organización, la FNC, a las organizaciones constituyentes. Ese proceso se consolida en diciembre de 2001 con la disolución de las organizaciones constituyentes y la adopción de una estructura unitaria con una Dirección Nacional, Direcciones departamentales y Direcciones Distritales: deja de ser una federación de organizaciones campesinas para transformarse en una estructura única.

Por otro lado, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas queda constituida como una coordinadora de organizaciones campesinas (en realidad como una Federación) a la cual adhieren todas las demás organizaciones salvo las que integran la FNC: cinco organizaciones de nivel nacional (MCP, OLT, UNC, ONAI²⁹ y TESAI REKA Paraguay) y una veintena de organizaciones de nivel regional, departamental y distrital³⁰. En las próximas páginas se explicarán las posiciones, la forma organizativa y las alianzas y las acciones que llevaron adelante estas dos organizaciones durante el período 1997-2000.

LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y LA CUESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS ORGANIZACIONES

La FNC procesó durante estos cuatro años una reestructura que la lleva a ser en este momento una organización con una estructura unitaria³¹. El órgano principal de conducción es la Dirección Nacional o Consejo Nacional de Delegados, constituida por dos delegados –titular y suplente– por cada departamento: en este momento hay 9 departamentos

29 ONAI es la Organización Nacional de Aborígenes Independientes, constituida principalmente por la etnia Aba Guaraní de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú (Bareiro, 2001).

30 Es difícil saber con certeza la cantidad de miembros que posee cada organización. La MCNOC declara que tiene 600 Comités de Productores Asociados y estima que eso representa unas 11 mil familias campesinas. La dificultad para estimar la cantidad de asociados es que el socio se asocia a la organización departamental, que es la que lleva (o no) los registros. En la FNC se informó que no sabían la cantidad de Comités de Base que la forman, ya que esa información se lleva a nivel de Distrito. No tienen un padrón de asociados. Sin embargo, cuando se hizo el registro de los productores que siembran algodón se inscribieron 34 mil productores. Los dirigentes prefieren remarcar la capacidad de convocatoria de la FNC al momento en que se realiza una movilización, cuando son capaces de poner 35 mil o 40 mil personas en la calle (entrevista realizada por el autor a Belarmino Balbuena de la MCNOC y a Marcial Gómez de la FNC, septiembre de 2002).

31 Este apartado está construido principalmente sobre una entrevista que le hizo el autor a Marcial Gómez, Secretario Adjunto de la FNC, el 12 de septiembre de 2002.

organizados. Estos dieciocho delegados se reúnen cada sesenta días con el Secretario General en Asunción, y es el cuerpo que traza las líneas generales de la organización. De allí se eligen los miembros del Comité Ejecutivo nacional, de diez miembros distribuidos en seis Secretarías: Secretario General, Secretario General Adjunto, Secretario para la Reforma Agraria, de Finanzas, de Actas, y de la Mujer. Este órgano se reúne cada treinta días. El Secretario General y el Secretario General Adjunto residen en Asunción, y son los que quedan a cargo de la ejecución de las decisiones y del manejo del aparato administrativo de la organización. La elección del Consejo Nacional de Delegados se hace por medio del siguiente mecanismo: en forma previa al Congreso Nacional de Delegados se realizan los Congresos departamentales, en los cuales se evalúan las propuestas realizadas por el organismo de conducción nacional, se realizan las propuestas y recomendaciones para el Congreso Nacional, y se eligen a los dos delegados del departamento que integrarán el Consejo Nacional de Delegados. El Comité Ejecutivo Nacional se elige en el Congreso Nacional a través de un sistema de representación proporcional entre las distintas listas que presenten candidatos para integrarla. En las últimas tres elecciones se presentó lista única acordada previamente en los Congresos departamentales.

Por otro lado, en cada departamento también funciona un Comité Ejecutivo departamental de diez miembros con las mismas seis Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional. Cada mes, luego de la reunión de dicho órgano, el Secretario General se reúne con los Secretarios Generales de cada departamento para transmitir los contenidos de las resoluciones del Ejecutivo Nacional y para ayudar a implementarlas.

En todos los órganos de Dirección las resoluciones se toman por consenso, pero si este no se logra las minorías deben acatar las decisiones mayoritarias. Hasta el momento tales situaciones han sido poco frecuentes: las decisiones, cuando se adoptan, han sido muy discutidas en los Comités de Base y en las diferentes instancias. Para ciertos casos especiales, modificación de estatutos o de las estructuras, o convocatoria de Congresos Extraordinarios de la organización, se necesitan mayorías especiales de dos tercios.

La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) se define como una unidad de acción³², compuesta por cinco organizaciones campesinas de nivel nacional y veintidós organizacio-

32 Este apartado está basado en la entrevista que el autor le hiciese al Coordinador General de la MCNOC, Belarmino Balbuena, el 12 de septiembre de 2002.

nes campesinas de nivel departamental. No tienen una estructura estable. A nivel de las colonias, cada organización tiene sus socios organizados en Comités de Productores. A nivel departamental hay una Mesa Coordinadora departamental formada por diez personas representantes de las organizaciones que tienen asociados en ese departamento. En la Coordinadora departamental cada organización tiene un cupo de delegados según la cantidad de Comités organizados que posea. La Plenaria está formada por diez delegados por departamento: está constituida en la actualidad por ciento veinte personas, y se reúne cada seis meses. La Conducción Política Nacional está formada por dos delegados por cada departamento. Son veinticuatro personas y se reúnen cada dos meses. De este órgano se elige la Conducción, formada por diez personas que están a cargo de las Secretarías: Secretario General, Secretario General Adjunto, Secretarías de Producción, de Sin tierras, de Mujer y Juventud, de Actas, de Finanzas, de Educación, de Relaciones Nacionales e Internacionales, y Secretaría Indígena. Este órgano se reúne por convocatoria. Cuatro de estos representantes a su vez residen permanentemente en Asunción.

La estructura ideada es una estructura de representación de las distintas organizaciones que la componen. Las decisiones suelen ser analizadas y discutidas en las Coordinadoras departamentales, para luego ascender hacia el Ejecutivo Nacional. Esta forma de funcionamiento hace que las decisiones sean más difíciles de tomar y que el proceso sea más lento, pero asegura un mayor grado de representatividad. Si se compara con la estructura montada por la FNC, se advierte que esta última es más ágil, está más centralizada, y por lo tanto permite que las decisiones bajen más rápidamente a las organizaciones departamentales y de allí a las organizaciones locales. Pero también parecería que el proceso inverso, es decir, el recorrido de una propuesta o de un planteamiento desde los organismos de base hacia la cúpula organizacional, es más dificultoso porque los canales no están claramente establecidos. Es decir que es una estructura pensada para la acción, y para que las decisiones fluyan más fácilmente desde la Dirección Nacional hacia las bases. En la MCNOC, en cambio, se ha priorizado el recorrido inverso: mientras está más claramente establecido cuál es el camino que las propuestas deben tomar desde las bases hacia la cúpula de la organización, el camino inverso, el de las decisiones, parece ser menos claro.

UNA CRONOLOGÍA DE LA ACCIÓN COLECTIVA (1997-2000)³³

LA SITUACIÓN POLÍTICA

El año 1997 está signado por la campaña electoral que se desarrolla durante todo el año, ya que las elecciones se realizan recién en mayo de 1998. En su transcurso el país se paraliza. Todos los recursos se emplean en la campaña, debilitando la menguada estructura económica y acentuando los problemas sociales. Desde los técnicos del Ministerio de Agricultura que salen a convencer a los campesinos “asistidos” de que voten por el candidato oficialista hasta la extrema inoperancia del Parlamento, que dividido en luchas internas casi no cumple con su función legislativa, desconociendo importantes leyes que tenía en estudio, como la de un nuevo Código Agrario.

La elección como Presidente del Ing. Raúl Cubas, candidato del General golpista Lino Oviedo, aumenta la inestabilidad política del país. El nuevo mandatario, dirigido y tutelado por Oviedo, demuestra su incapacidad para gobernar el país a la par que su falta de respeto por los procedimientos constitucionales le granjea la enemistad de los otros poderes del Estado. Los proyectos de ley que envía al Parlamento son frenados por la oposición, que tiene mayoría en las Cámaras. La discrecionalidad en el manejo del poder se revela aún en la designación de funcionarios estatales en puestos clave –es el caso del Ministerio de Agricultura– por lealtad partidaria antes que por idoneidad técnica. Esta situación de ingobernabilidad se traducirá en una aguda crisis económica y en el empeoramiento de la situación social de los sectores más pobres de la población.

Durante 1999 el país atravesó por tres momentos distintos. En los primeros meses la ingobernabilidad llegó al extremo y culminó con el asesinato del vicepresidente Argaña. En ese momento, la presencia de una gran movilización campesina en Asunción fue el elemento clave para forzar la renuncia del Presidente y la designación de un gobierno de Unidad Nacional. El segundo momento, entonces, fue de alivio –porque se había conseguido aventar el espectro de un gobierno autoritario encabezado por Oviedo que recordaba viejas prácticas políticas a las cuales la ciudadanía no quería regresar, y hacer resurgir la esperanza de que este nuevo gobierno, que representaba a una coalición de

33 Este apartado está basado en los Informes Anuales publicados en el número de diciembre de cada año del *Informativo Campesino*, revista mensual publicada por el Centro de Documentación y Estudios (CDE) Asunción, Paraguay.

los tres principales partidos políticos, lograría sacar al país de la crisis política, económica y social en la que estaba inmerso.

Pero ante el asombro de la ciudadanía, el gobierno de coalición muy pronto mostró que el clientelismo, el amiguismo y el prebendarismo no eran patrimonio sólo del Partido Colorado. Los políticos de los partidos que habían estado en la oposición durante tantos años criticando estas conductas cayeron en las mismas prácticas. La tregua social que las organizaciones sociales le habían concedido al nuevo gobierno no duró más de dos meses, iniciándose hacia finales de junio grandes movilizaciones y masivas ocupaciones de tierras.

Durante el año 2000 la frustración y la incredulidad de los ciudadanos se extienden a todo el sistema político. La coalición demuestra una gran fragilidad a la hora de gobernar; no tiene un plan de gobierno definido, y más bien parece operar por reacción frente a los desafíos de las organizaciones sociales, entre ellas el movimiento campesino. En el sector rural, la ausencia de una política agraria que responda a las necesidades de los pequeños productores posterga su desarrollo.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

En lo económico, el periodo 1998-2000 se caracteriza por la recesión. La principales razones por las cuales ello ocurre son: “el manejo politizado, partidizado y electoralizado de la política económica en general y de la política cambiaria en general; la falta de transformaciones de fondo o estructurales (reforma del Estado con privatizaciones); caída del comercio de triangulación o reexportación; magro desempeño de la agricultura y caída del consumo interno” (CDE, *Informativo Campesino*, diciembre 2000: 2).

El índice de desempleo crece a lo largo de los cuatro años, para ubicarse en el 17% de la PEA en el 2000. La pobreza alcanza a la mitad de la población rural, pero la indigencia agobia a 650 mil personas. La industria se desactiva, el comercio recoge un índice de quiebras superior al de años anteriores, y la agricultura tiene cuando menos un comportamiento irregular.

En el ámbito de la educación y de la salud pública las cifras son alarmantes. Cifras oficiales confirman que, de cada cien alumnos que comienzan la educación primaria en el medio rural, sólo tres alumnos terminan el sexto año. Con esos índices de deserción, la educación elemental se transforma en un bien escaso, condenando a la mayoría de los niños del campo que asisten a la escuela pública a ser

en el futuro mano de obra no calificada. Con ello también se impide un verdadero desarrollo rural, que debe pasar por contar con trabajadores calificados. En el ámbito de la salud se denuncia que los centros y puestos de salud rurales carecen de médicos y de infraestructura mínima. Mientras la salud de la población rural está desprotegida, muchos recurren a la medicina tradicional para paliar sus necesidades. Pero si bien el gobierno aduce que la falta de recursos es la causa de todos estos males, la Contraloría General de la República denuncia que “la corrupción en sus diversas formas ha privado al país de 2.000 millones de dólares, una cifra que es casi el doble que la deuda externa del Paraguay (mil cuatrocientos millones de dólares) y más del doble de la reserva internacional” (CDE, *Informativo Campesino*, diciembre 1997: 6).

La principal queja del sector agropecuario es la inoperancia gubernamental, extremada por un continuo cambio de los ministros de Agricultura. El MERCOSUR produce tremendas dificultades a los pequeños productores que no tienen condiciones de competitividad frente a la agricultura de sus dos grandes vecinos. El gobierno intenta reactivar la alicaída producción de algodón, lanzando anualmente planes de financiamiento para el cultivo. La inoperancia y la corrupción en los organismos del Estado hacen que los apoyos prometidos para las campañas algodonerías no lleguen, o lleguen tarde. Los precios decrecientes del cultivo desalientan y endeudan a los productores. En cambio, crece sostenidamente la producción de los alimentos básicos que conforman el autoconsumo campesino. Las organizaciones campesinas, en acuerdo con algunos municipios, instrumentan ferias vecinales que permiten diversificar la producción comercial de los pequeños productores, encontrar un mercado para ellas, y mejorar los precios de la canasta de consumo popular.

En cuanto a la reforma agraria instrumentada por el gobierno a través del Instituto de Bienestar Rural, un estudio del Ministerio de Agricultura, el Banco Mundial y el BID concluyó “que los asentamientos rurales no han producido el arraigo de los campesinos, sino que en varios de ellos se pudo observar la rápida reconcentración de la tierra y los propios beneficiarios se convirtieron de nuevo en campesinos sin tierra. (...) el IBR señaló que son aproximadamente 180.000 las familias rurales que necesitan asistencia por encontrarse por debajo de la línea de pobreza admitida” (CDE, *Informativo Campesino*, diciembre 1997: 4).

LA ACCIÓN COLECTIVA

Las expresiones de la acción colectiva se pueden clasificar en dos grandes subconjuntos.

Por un lado los conflictos por la tierra, y por el otro las manifestaciones.

A su vez, los conflictos por la tierra pueden ser de distinto tipo –ocupaciones de tierras públicas o privadas, reocupaciones, desalojos– y pueden dar lugar a la expropiación de las tierras o a su cesión, generalmente luego de una negociación que puede llevar desde algunos meses a varios años. Los conflictos a su vez pueden llevar a la detención de los campesinos, y en algunos casos a la represión violenta durante el desalojo, la tortura, los malos tratos de los detenidos, y al asesinato de campesinos.

Las manifestaciones se llevan a cabo en los pueblos y ciudades del interior, y tres o cuatro veces por año son movilizaciones masivas hacia Asunción. Mientras las primeras suelen estar organizadas por organizaciones campesinas departamentales o Distritales, las segundas suelen ser convocadas por las organizaciones de nivel nacional. También pueden llevarse a cabo cortes de ruta, sitios de las plazas u otros lugares públicos de pueblos y ciudades, ocupaciones de locales u oficinas públicas, etcétera. Las manifestaciones tienen como motivo principal el reclamo por la política de tierras, el apoyo a ocupaciones, la protesta por la violación de los DDHH, el reclamo por mejoras en los precios de los productos campesinos, el reclamo por créditos, etcétera. En algunas ocasiones, generalmente cuando las movilizaciones son hacia Asunción, los reclamos son de carácter más general y se vinculan al reclamo por cambios en la política económica, por la reactivación productiva, por la renuncia del Presidente de la República, por la Reforma Agraria, etcétera.

CUADRO 4

*PARAGUAY: CONFLICTOS POR LA TIERRA Y MANIFESTACIONES CAMPESINAS
(1990-2000)*

Año	Conflictos	Ocupaciones*	Desalojos**	Familias participantes	Detenciones	Manifestaciones
1990	99	29	31	sd	820	34
1991	66	17	23	sd	566	19
1992	50	17	16	sd	120	15
1993	46	14	17	sd	128	18

CUADRO 4 - CONTINUACIÓN

Año	Conflictos	Ocupaciones*	Desalojos**	Familias participantes	Detenciones	Manifestaciones
1994	57	26	24	sd	411	60
1995	49	23	25	sd	359	37
1996	54	20	27	6.386	553	39
1997	43	15	13	4.572	137	17
1998	28	14	11	3.565	429	15
1999	52	31	20	6.767	1.048	54
2000	47	19	12	5.666	531	34
Totales	591	225	219		5.102	342

Fuente: *Informativo Campesino*, CDE, diciembre de 2000, pp. 7.

* y **: ocupaciones y desalojos son las principales formas de expresión de los conflictos.

AÑO 1997

Los conflictos por la tierra disminuyeron, pero la violencia contra los ocupantes no. El acoso policial y parapolicial ha sido permanente, aún contra campesinos de asentamientos ya regularizados, con el objetivo de que no pudiesen prestar ayuda a otros Sin Tierra. En Caaguazú, los ocupantes reaccionaron frente a los atropellos y quemaron una comisaría y atacaron otra con disparos, sin que hubiese víctimas. Durante el año se registraron 43 casos de conflictos de tierra, habiéndose realizado 15 ocupaciones, algunas de las cuales son reocupaciones; hubo 13 desalojos y fueron encarceladas 137 personas. Durante 1997 se llevaron a cabo 17 manifestaciones, menos de la mitad de las ocurridas el año anterior. Dentro de las organizaciones campesinas hubo dirigentes que cuestionaron la real eficacia de las movilizaciones luego de la marcha nacional campesina realizada el 18 y 19 de marzo (como ocurre regularmente desde cuatro años atrás), luego de que hubo varias desinteligencias entre las organizaciones y a la vista de los escasos resultados obtenidos. A pesar de ello, la movilización y la ocupación siguen siendo los instrumentos de presión más fuertes que tiene el campesinado. Prueba de su incidencia son las disposiciones que adoptó el gobierno en el transcurso del año, modificando la circulación en las calles de Asunción para dificultar las movilizaciones públicas, y la aprobación en el Congreso de una nueva ley que castiga más duramente a los ocupantes.

AÑO 1998

Posiblemente debido a que este fue un año electoral, hubo una disminución en los conflictos por la tierra. Sin embargo, en algunos casos los campesinos debieron resistir los desalojos judiciales como una forma de proteger la parcela que les da la subsistencia. En otro caso atacaron un puesto policial, apoderándose de las armas de los efectivos policiales que resguardaban la propiedad de la que fueran desalojados momentos antes. Los Sin Tierra realizaron este año 14 ocupaciones, y hubo 11 desalojos violentos, con la detención de 429 ocupantes entre hombres mujeres y niños. Tres campesinos fueron asesinados en diversas circunstancias por efectivos policiales o parapoliciales.

En el correr del año las movilizaciones campesinas llegaron tres veces hasta Asunción para reclamar contra la política neoliberal, exigir la condonación de deudas que los campesinos mantienen con el Estado y un plan de reactivación económica, reclamar la realización de una verdadera Reforma Agraria, etcétera. Varias fueron las movilizaciones de carácter departamental (hasta completar las 15 que hubo en el año en todo el país) para reclamar por la detención de campesinos o en repudio a la represión y el asesinato de otros. En los meses de febrero y marzo, en consonancia con el inicio de la cosecha, se realizaron dos movilizaciones reclamando por el bajo precio del algodón.

También en el correr de este año se produce la fractura de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas en dos bloques, uno liderado por la FNC, la ONAC y el MJCC, y otro en el que quedan las demás organizaciones campesinas.

AÑO 1999

Se incrementaron las ocupaciones como respuesta al desencanto y a la falta de respuesta del nuevo gobierno de Unidad Nacional. Los campesinos comprueban que la única manera de conseguir tierras es a través de las ocupaciones. Las vías legales se empantanar en interminables litigios y procesos judiciales de dudoso trámite. Esto ha llevado a la polarización de las posturas, entre los Sin Tierra que cada vez más apremiados por la necesidad presionan con ocupaciones, campamentos, huelgas de hambre y movilizaciones, y por el otro lado los propietarios de los latifundios, que presionan a los poderes del Estado y cuando no consiguen lo que desean no dudan en armar a civiles para defender sus propiedades y atemorizar y atacar a los campesinos.

En este año se produjeron 52 conflictos, de los cuales 31 fueron ocupaciones y 20 desalojos. Las detenciones llegaron a un récord histórico: 1.048 personas fueron detenidas. La violencia también se ha acrecentado, especialmente por la presencia de parapoliciales contratados por los latifundistas. Seis campesinos fueron asesinados este año, sin que haya habido ningún procesamiento.

A principios de año el clima político estaba enrarecido: “Las organizaciones campesinas habían anunciado la realización en serie de movilizaciones de protesta por el rumbo que iba tomando la política agraria del gobierno. La creación de comités de agricultores y de cooperativas que respondían a los intereses del ovedismo y el peligro de ovedización de las existentes mediante prebendas y presiones políticas alertaron a los dirigentes campesinos. Corrían fuertes rumores de que los créditos iban a ser canalizados sólo a los grupos que respondían al movimiento UNACE (Unión Nacional de Colorados Éticos) liderado por Lino Oviedo” (CDE. *Informativo Campesino*, marzo 1999: 2).

En este clima, la Federación Nacional Campesina, la Organización Nacional Campesina y el Movimiento Juvenil Campesino Cristiano, los tres aliados que se habían apartado de la MCNOC y conformado su propio bloque el año anterior, comienzan a organizar por quinto año consecutivo la marcha campesina hacia Asunción. Sin embargo, este año la marcha tuvo consecuencias inimaginables para sus organizadores como consecuencia del asesinato del Vicepresidente de la Nación, Luis María Argaña, el día de la llegada de la marcha a la capital del país. La marcha partió desde los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Paraguari y Concepción, y convergió en densas columnas hacia la capital. Los organizadores estimaron que 35 mil personas y 600 vehículos participaron de la marcha.

Como en los años anteriores, los reclamos básicos eran: precio justo por el algodón; precio justo para productos diversificados; acceso a la tierra propia; nuevo estatuto agrario; nueva política agraria favorable al campesinado; congelamiento de precios de la canasta familiar; retiro del MERCOSUR. En esta marcha, además, se focalizó en los siguientes reclamos: condonación de las deudas; crédito oportuno; transferencia de tecnología; mercado seguro; seguro agrícola; infraestructura.

Como se advierte, los reclamos eran muy heterogéneos y tenían distintos niveles de generalidad. Sin embargo, los organizadores de esta marcha habían focalizado su reivindicación en la obtención de la

condonación de las deudas que los campesinos mantenían con el Estado, estimados en cien mil familias. Tanto es así, que se había anunciado que los manifestantes se quedarían por tiempo indefinido en Asunción, no regresando a sus domicilios hasta que no hubiesen obtenido la condonación de las deudas. Los manifestantes ya venían preparados para una movilización que podía llevar varios días.

Cuando las columnas campesinas llegan en la mañana del 23 de marzo al Seminario Metropolitano, en cuyos predios estaba previsto que acamparían, los esperaban la Pastoral Social y otras organizaciones de apoyo con alimentos y puestos de atención de salud. Pero la noticia del asesinato del Vicepresidente había cambiado el sentido de la marcha, que pasó a segundo plano en la atención nacional.

Previamente hay que destacar que en las elecciones del año anterior había sido elegido como Presidente el Ing. Raúl Cubas por el Oviedismo, y como Vicepresidente Luis María Argaña, hombre del riñón del Partido Colorado oficialista y enfrentado a los oviedistas. Por lo tanto, su asesinato es achacado al General Lino Oviedo como autor moral del mismo. Cualquiera sea la verdad, que posiblemente nunca se esclarezca, el hecho concreto fue que los sectores oficialistas del Partido Colorado y los partidos de oposición quieren impulsar el juicio político y la destitución del Presidente Cubas. Por otro lado, los oviedistas, en minoría, movilizan y dirigen a grupos armados hacia la plaza del Congreso –la Plaza Uruguay– para impedir que los parlamentarios puedan reunirse. La posesión de esta plaza se transforma así en un elemento estratégico para que el Congreso Nacional pudiera sesionar.

Mientras los campesinos marchaban hacia Asunción, la Cámara de Diputados había dado media sanción a una ley que condonaba las deudas. Cuando el Senado se reunió en la mañana del martes 23 para a su vez sancionar la ley, se conoció la noticia del asesinato del Vicepresidente, cambiando así el sentido de la Sesión. Esa tarde los campesinos iniciaron su marcha desde el Seminario, atravesando la ciudad, hacia la Plaza Uruguay frente al Parlamento. La razón inicial de la marcha y de la concentración frente al Parlamento era presionar por la condonación de las deudas. Pero ahora la incertidumbre era el signo que campeaba en los rostros. El país se había paralizado, a la expectativa. Un grupo de jóvenes denominado “Jóvenes por la democracia” convoca a una concentración frente al Congreso para pedir la renuncia del Presidente de la República. Al anochecer la Plaza estaba abarrotada de gente.

Los partidos políticos les reclaman a los campesinos que vuelquen sus fuerzas a apoyar el juicio político al Presidente, en realidad un juicio al ovidismo. Los dirigentes, sin embargo, no transan. Exigen que primero se sancione la ley de condonación de las deudas, y luego ellos apoyarían el juicio político. Así, se retiran a los predios del Seminario mientras una multitud compuesta por organizaciones juveniles y partidos de oposición la ocupan ahora para impedir el ingreso de los ovidistas. En la madrugada del día siguiente, miércoles 24, los campesinos vuelven a ocupar la plaza del Congreso ante el reclamo de los jóvenes, que no pueden resistir la presión de los ovidistas y de la propia policía que, siguiendo órdenes del Presidente Cubas, intenta desalojarlos. En los días siguientes la presencia campesina en la plaza fue decisiva. Con su férrea organización y disciplina, los campesinos impidieron la infiltración de los ovidistas entre los que acampaban en la Plaza, y mantuvieron su control ante la presión policial y la provocación de civiles armados.

En medio de mucha confusión y de vehementes negociaciones, el Parlamento sesiona los días 24, 25 y 26 y finalmente sanciona la ley de condonación de deudas. Los campesinos se mantienen en la Plaza hasta el día lunes 29 de marzo, en apoyo al juicio político que termina con la destitución de Cubas y hasta la asunción del nuevo Presidente González Macchi, regresando entonces a sus lugares de origen. Con ello los campesinos lograron una importante victoria, no sólo porque lograron la condonación de las deudas que asfixiaban a los pequeños productores, sino también porque colaboraron en la desarticulación del aparato político ovidista que, regresando a las peores prácticas prebendarias y corruptas en la distribución de favores en el campo, estaba minando a las propias organizaciones campesinas.

AÑO 2000

En este año hubo 47 conflictos de tierra, de los cuales 13 fueron nuevas ocupaciones realizadas durante ese año y 6 fueron reocupaciones. Hubo 12 desalojos. En total se está litigando por 75 mil hectáreas de tierras, y los campesinos involucrados sumaron 5.666. Los conflictos de mayor impacto en la opinión pública fueron aquellos en los que se empleó más violencia. En una ocupación en el departamento de San Pedro, las fuerzas policiales asesinaron a tres ocupantes. En otra ocupación en Caagazú se detuvo a 320 campesinos, y se hirió a 60 perso-

nas, 10 de ellas con impactos de bala. Durante el año fueron asesinados 11 campesinos.

En marzo de ese año los dos bloques de organizaciones campesinas realizan la marcha hacia Asunción, pero lo hacen en forma separada y en días distintos. La FNC moviliza 15 mil campesinos, mientras la MCNOC pone en la calle a 10 mil manifestantes. La principal reivindicación de ambas es la reactivación del aparato productivo. Pero como se relató más arriba, mientras la FNC lanza su propuesta de reactivación productiva a través de la reactivación algodonera, la MCNOC firma con el gobierno un acuerdo de reactivación por 12 millones de dólares basado en la diversificación productiva a través de pequeños proyectos administrados por las organizaciones campesinas.

En el correr del año se realizan un total de 34 manifestaciones, nueve de ellas en Asunción, y las demás en ciudades y pueblos del interior. Doce de ellas tienen que ver con reclamos por la tierra. Otras ocho son en reclamo por los asesinatos de campesinos o la impunidad de sus ejecutores y mandantes. Cinco son por reclamo de mejores precios de los productos, comercialización y créditos.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

EL CAMPESINO, LA TIERRA Y LA LENGUA GUARANÍ

Para el caso del Paraguay es posible y aún conveniente hablar de un Movimiento de los Campesinos formado a su vez por numerosas organizaciones de nivel distrital, departamental o nacional. El Movimiento Campesino se encuentra dividido por razones de estrategia en torno a propuestas diferentes de desarrollo rural. Sin embargo, estas diferencias no son tan fuertes como para que en condiciones extremas no predomine la unidad del Movimiento Campesino. La unidad no es un bien dado sino una trabajosa construcción. Eso es lo que ha aprendido el Movimiento de los Campesinos en estos años luego de la caída del régimen stronista.

Ahora bien, ¿que es lo que confiere la identidad a los miembros de este Movimiento? En primer lugar, su identificación como campesinos, como miembros de un colectivo distinto, que los identifica y los separa de otros grupos sociales. Como ocurre en cualquier otro movimiento, no todos los que comparten una misma identidad son miembros activos del movimiento. Así como no todos los obreros forman parte del Movimiento Obrero, no todos los campesinos forman parte del Movimiento de los Campesinos. Aun más, hay algunos campesinos

que forman parte de organizaciones o partidos políticos que son opuestos al Movimiento de los Campesinos, en cuanto no comparten ni sus aliados, ni su proyecto político, ni su utopía.

¿Qué características tiene la identidad campesina? Es posible diferenciar al menos dos vertientes para analizar esta identidad. Por un lado, la racionalidad económica. Por otro, la existencia de una cultura campesina. Pero ambas giran en torno al vínculo del campesino con la tierra. Campesino es aquel que trabaja la tierra que posee (no necesariamente en propiedad) con la sola ayuda del trabajo familiar. Esporádicamente puede contratar fuerza de trabajo para complementar tareas en picos de demanda, y también puede vender parte de la fuerza de trabajo familiar en momentos de necesidad. El campesino produce primero con el objetivo de atender sus necesidades de consumo alimentario. Si hay excedentes, los vende. También puede producir cultivos de renta para atender sus necesidades de dinero, pero sus vínculos con el mercado de productos, de bienes, de tierras, de insumos y de trabajo son débiles. En la actualidad ningún campesino existe sin vínculos con los mercados. Esta débil relación con los mercados es una de las características que lo separan del *farmer*, quien produce para los mercados con tierra y trabajo familiar. El campesino es además un grupo subordinado en la sociedad. Otras clases y grupos sociales lo expolían, extrayendo parte de los excedentes económicos que produce.

La tierra es para el campesino su medio de vida, el lugar donde se produce y reproduce el grupo familiar, y en determinados contextos el origen de su linaje. Sin tierra, el campesino deja de ser tal. Aún para aquellos que pierden la tierra o no la tienen por subdivisión o sistemas de herencia, la identidad sigue vinculada a la tierra. Esa es la identidad de los Campesinos Sin Tierra, que se construye sobre la base de la negación de la posesión, pero también de la posibilidad de recuperarla. Este “apego a la tierra” (Galeano, 1984) es más fuerte en sociedades que ofrecen pocas oportunidades en otros medios de vida alternativos. En Paraguay, país en que la industrialización ha sido muy débil y que tiene altos niveles de desempleo, las ciudades sólo pueden ofrecer malos empleos en el sector informal. En ese contexto es más explicable que la presión por la tierra haya sido fuerte, ya que es vista por parte de la población campesina como una de las pocas posibilidades de tener trabajo y un medio de vida.

Galeano entiende la cultura campesina como “el conjunto de símbolos, costumbres y formas compartidas de pensar”, algunos de

los cuales son propios de la identidad campesina mientras otros son absorbidos de la cultura externa. La cultura campesina debe entenderse como la resultante de elementos contradictorios. Así, por ejemplo, en el Paraguay, el campesinado por razones históricas es parcelario (y no comunitario como en el área andina), con lo cual se refuerzan los componentes individualistas. Pero también las propias condiciones de la producción agrícola parcelaria, i.e. los ciclos biológicos que tienen picos de demanda de fuerza de trabajo, la falta de mano de obra y la proximidad de las parcelas, refuerzan instituciones solidarias como la “minga” o la “mano vuelta” que establecen relaciones de cooperación entre familias vecinas, reforzadas por vínculos familiares, relaciones de compadrazgo y clientelismo (Galeano, 1984).

Para el caso de Paraguay, la lengua guaraní es otro elemento que refuerza la identidad campesina. Es cierto que los campesinos no son los únicos que hablan la lengua guaraní, pero también lo es que son los que más la hablan. El guaraní es la lengua materna, aquella en la que se socializan los niños, la que hablan las madres, la que se usa en el hogar. El castellano es la lengua del exterior, la de la escuela, la lengua “oficial”, la de los negocios, la de los medios de comunicación y en general la lengua del dominador. El 40% de la población paraguaya sólo habla el guaraní, mientras que el 6% de la población sólo habla el castellano, y un 49% habla ambos idiomas. Pero cuanto más población rural tiene un departamento, mayor será la población que habla sólo guaraní: por ejemplo San Pedro, donde el 80% de la población sólo habla guaraní, Caazapá con 76%, o Concepción con el 69% (Steckbauer, 2000).

Salvo raras excepciones, el guaraní estuvo prohibido en las escuelas, siendo perseguido y denostado su uso. Las excepciones se dieron en los tiempos de guerra: tanto en la guerra de la Triple Alianza como en la Guerra del Chaco, se usaba el guaraní como forma de evitar que el enemigo se enterase de las órdenes. Tampoco resultaba ajeno a esta disposición que los soldados fueran campesinos que no sabían castellano. De modo que en los periodos de defensa de la nacionalidad el guaraní volvía a recuperar su status, para perderlo nuevamente en épocas de paz. Pero esta persecución sólo fortalecía a la lengua guaraní como la lengua de los campesinos, la de los pobres, la de los dominados, frente al castellano, que era la lengua oficial. En 1992 una nueva Constitución elevó al guaraní al rango de lengua oficial de la Nación, junto con el castellano. Este reconocimiento posibi-

litó recientemente su enseñanza en las escuelas y una mejoría en el status social de la lengua (Steckbauer, 2000).

La lucha por la tierra no ha consistido sólo en las ocupaciones y la presión ejercida por los campesinos para conseguir nuevas tierras en las que asentarse. También ha sido la lucha por conservar las que poseían frente a las demandas de los ganaderos, que pretendían ocupar tierras comunales o que, esgrimiendo títulos recientes, pretendían expulsar a campesinos que las poseían desde mucho tiempo atrás pero sin títulos legales. Estas batallas fueron las que dieron origen a las Ligas Agrarias Cristianas en la década del '60. En estos casos los campesinos actuaban convencidos de hacerlo en legítima defensa, seguros de que los "otros" actuaban atacando derechos constituidos y legítimos³⁴ que provenían de la posesión continuada de la tierra más allá de su tenencia legal.

Pero aún en el caso de las ocupaciones de tierras, estas se hacen esgrimiendo un criterio "moral". No es justo, en la perspectiva de los campesinos, que las tierras permanezcan incultas cuando hay tantos campesinos que necesitan de ellas para sobrevivir. Ya sea que fuesen tierras públicas no ocupadas, tierras públicas ocupadas sin permiso, o tierras privadas pero mal explotadas, los campesinos han esgrimido, en las ocupaciones, el concepto de que si eran tierras agrícolas y estaban sin utilización o siendo empleadas en ganadería extensiva, esto era injusto e inmoral en presencia de tantas necesidades de las familias campesinas. Esta situación, en su perspectiva, les da derecho a ocuparlas para ponerlas a producir y así dar sustento a las familias sin tierra.

Un último elemento cultural que es preciso considerar en el caso del campesinado paraguayo es su religiosidad, y en particular su fuerte adhesión a la Iglesia Católica. Si bien este elemento tampoco es sólo patrimonio de los campesinos, sino que es una manifestación popular, es necesario reconocer el papel aglutinante que ha jugado la Iglesia Católica en su aliento a las organizaciones campesinas. En la década del sesenta, el surgimiento de la Teología de la Liberación y de una vertiente dentro de la Iglesia que apoyó decididamente a la organización del campesinado fue lo que dio pie a la formación de las Ligas Agrarias Cristianas en Paraguay (y también en Brasil y en la

34 Para una interesante discusión acerca de este tema ver Knott, John William, "Land, Kinship and Identity: The Cultural Roots of Agrarian Agitation in Eighteenth-and Nineteenth-Century Ireland", en *The Journal of Peasant Studies*, Volume 12, Number 1, October 1984.

Argentina). La presencia de la Iglesia y de sus obispos y sacerdotes en la lucha por la tierra revistió a la lucha de los campesinos de un sello de "santidad". ¿Cómo no iban a estar en lo cierto las organizaciones campesinas en sus reclamos, si la Iglesia los apoyaba y los alentaba? ¿Cuán invulnerables se sentirían los campesinos en sus reclamos, cuando el obispo y los sacerdotes marchaban junto con ellos? Aún ahora que la Iglesia apoya el Movimiento de los Campesinos pero lo hace desde una posición distante y más prescindente, ¿qué papel juega en el imaginario colectivo de los campesinos que marcharon a Asunción en el Marzo Paraguayo en 1999 la recepción de las densas columnas humanas en el ex Seminario Metropolitano, y que el obispo de Asunción les dirigiese la palabra para recibirlos?

LOS ADVERSARIOS

Para el Movimiento de los Campesinos el adversario son los latifundistas en general, y en particular la Asociación Rural del Paraguay. Esta institución ha asumido la representación de los grandes propietarios, y se ha opuesto por todos los medios a las ocupaciones de tierras. En 1996, cuando las ocupaciones arreciaban, crearon una organización paralela, la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, que en realidad encubría una organización paramilitar. Sin embargo, posteriormente pasa a controlar la institución un grupo más moderado y se la desactiva. Los grandes propietarios amenazados contratan a sus propios guardias armados, que en muchos casos son los responsables de los vejámenes, las torturas y los asesinatos de campesinos³⁵. También identifican como sus enemigos a los empresarios nucleados en la Federación de la Producción y del Comercio, que reúne a los empresarios y comerciantes más fuertes del país. Las organizaciones campesinas sostienen que hay una densa imbricación entre los latifundistas y el poder político, ya que muchos de ellos son altos jefes militares, parlamentarios o funcionarios políticos del gobierno.

Otro grupo social que es visto como adversario son los intermediarios, en especial aquellos comerciantes que intermedian comprando la producción de algodón y que a su vez son los mismos que en sus almacenes de campaña les venden las provisiones a los campesinos, muchas veces a cuenta de la futura cosecha. Este sistema de crédito,

35 La Federación Nacional Campesina contabiliza 36 muertos entre sus asociados. De ellos, 20 lo fueron a manos de civiles armados y el resto por la policía en los cortes de ruta, desalojos y otras acciones (entrevista del autor a Marcial Gómez, dirigente de la FNC, 12 de septiembre de 2002).

vigente en la mayoría del campo paraguayo, da lugar a las peores expropiaciones. En la punta de la cadena industrial identifican a las empresas propietarias de las treinta desmotadoras de algodón que hay en el país como las que controlan el mercado algodonero y fijan los precios del algodón en detrimento de su rentabilidad.

Más recientemente, a medida que la conciencia política de los dirigentes campesinos se ha ido elevando, han pasado a ser adversarios también el gobierno y la política neoliberal, las instituciones internacionales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

LA UNIDAD

La unidad del Movimiento de los Campesinos es una trabajosa construcción que se logra sólo en contadas ocasiones. En realidad, lo asombroso es que se logre la unidad a partir de organizaciones que tienen orígenes muy disímiles, y que se logre la unidad en un campo de fuerzas que está sometido a tensiones desde diversos ángulos.

Como se dijo más arriba, el Movimiento de los Campesinos Paraguayos logró unificarse a través de la creación de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, entre 1994 y 1997. Esta unidad se quebró con la creación de los dos “bloques” en que quedó fracturado el movimiento: la Federación Nacional Campesina (con sus dos aliadas, la ONAC y el MJCC) por un lado, y por el otro la MCNOC, que es un conglomerado de organizaciones.

Después de la represión y la desactivación de las Ligas Agrarias Cristianas en 1976, pasan varios años sin que el campesinado tuviese una expresión propia. Sin embargo, a inicios de la década del ochenta, por la acción de la Pastoral Social y de diversas ONGs, se comienza a reorganizar. Las expresiones son muy cautas en un principio, y los Comités o Asociaciones campesinas que se crean tienen un neto corte productivo. Los campesinos se asocian, apoyados por estas organizaciones externas, para conseguir pequeños créditos, obtener asistencia técnica, mejorar los canales de venta de sus productos o comprar en conjunto los insumos agrícolas que precisan para sus cultivos.

Gradualmente ocurren dos cosas. Por un lado, que los controles del régimen se van aflojando, permitiendo mayores niveles de organización; y por otro, que los Comités o las Asociaciones locales se percatan de las ventajas de construir organizaciones de carácter Distrital o departamental que, reuniendo a varios Comités, pudiesen

mejorar sus condiciones de negociación, ya sea en el mercado, ya sea con las autoridades locales o nacionales. Este proceso convergente dará lugar a la CONAPA.

Por otro lado, ex dirigentes de las Ligas también se propusieron reconstruir una organización campesina de nivel nacional, a la que denominaron Movimiento Campesino Paraguayo. Mientras tanto, por otros conductos, también se crean otras dos organizaciones de nivel nacional.

En resumen, cuando González, Casaccia, Vázquez y Velázquez en 1987 hacen su estudio de las organizaciones campesinas en Paraguay, encuentran cinco organizaciones de nivel nacional, ocho de nivel regional y diez de carácter local que tienen existencia propia. La mayor de las organizaciones de nivel nacional, la CONAPA, está formada, según los autores, por trescientos Comités de Productores. Se podría caracterizar a la década del ochenta como de profusa y activa constitución de organizaciones campesinas prioritariamente por un movimiento inductivo, desde las organizaciones locales hacia las organizaciones de mayor alcance.

Ex-dirigentes liguistas, la Pastoral Social y las ONGs, entre otros, fueron los principales promotores de este proceso organizativo. Pero entonces cada uno de estos vectores trabajó con su propia orientación y sus propios objetivos. En el caso de las ONGs, se ha hecho notar que su trabajo estuvo muy orientado a las cuestiones técnicas y productivas: “las ONGs que han iniciado o acompañado proyectos de las organizaciones campesinas no han tomado en cuenta la perspectiva de la organización política como objetivo del trabajo promocional. Se ha trabajado en la mayoría de los casos, con un enfoque meramente técnico-productivo...” (Palau, 1995: 7).

Los ex-liguistas que dieron lugar al MCP, por el contrario, se plantearon de entrada formar una organización gremial campesina autónoma “independiente de cualquier tutelaje, ya sea de partido político, jerarquía eclesial y/o del Estado”³⁶.

El gobierno, a través del Servicio de Extensión del Ministerio de Ganadería y Agricultura, del Instituto de Bienestar Rural, del servicio de Crédito Agrícola de Habilitación, etc., ha creado numerosos Grupos de Agricultores que con distintos nombres sumaban cerca de 1.600 en el momento en que González et al hicieron su estudio en 1987. Estos grupos actuaban desvinculados entre sí, muy dependientes de las institu-

36 Estatutos sociales del MCP. Citado por González et al, 1987, pág. 30.

ciones públicas que los organizaban; carentes de representatividad, vehiculizaban las políticas públicas dirigidas a la agricultura y no se ocupaban de otros temas como la cuestión de tierras, la salud, la educación, etcétera (González et al, 1987: 100). Si bien estas organizaciones no pueden ser consideradas como parte del Movimiento de los Campesinos en el sentido en que se lo define en este estudio, no debe minimizarse su efecto sobre las propias organizaciones gremiales como factor de desmovilización y de desorganización del Movimiento.

Es preciso tener presente que los partidos políticos tradicionales y los partidos de izquierda todos intervienen, interfieren y tratan de incidir en el Movimiento de los Campesinos. El Partido Colorado tiene sus propios caudillos políticos entre los campesinos, y también, a nivel local, entre los comerciantes y los funcionarios públicos de cierto rango. El Partido canaliza favores y prebendas a través de estos “punteros” políticos, a veces con la expresa intención de cooptar a dirigentes campesinos o de desmovilizar a las organizaciones locales. Algo similar se puede decir del Partido Liberal Radical Auténtico, aunque su capacidad de incidencia haya sido mucho menor al no haber estado en el poder.

Más recientemente, a partir de la década del noventa, al haberse legalizado la actuación de los partidos de izquierda, ellos también pretenden incidir sobre el Movimiento de los Campesinos. La forma de hacerlo ha sido a través de la cooptación de los principales dirigentes de las organizaciones campesinas de mayor predicamento. Varios observadores externos han hecho notar que posiblemente la división en dos bloques del Movimiento de los Campesinos se deba, al menos en parte, al accionar de esos partidos sobre el Movimiento³⁷.

Es por ello –la acción de estas fuerzas divergentes sobre el Movimiento de los Campesinos– que en realidad la unidad del mismo parecería ser más una construcción necesaria (y tal vez posible) que un resultado evidente³⁸.

37 En entrevistas mantenidas con el autor en el año 2002.

38 En el mes de mayo de 2002, un conjunto de organizaciones sindicales, campesinas y políticas confluyeron en la formación del Congreso Democrático del Pueblo para oponerse a la Ley de Privatización de Empresas Públicas, a la Ley Antiterrorista, a la reforma de la banca pública, a la Ley de Concesión de Rutas y a la corrupción y la impunidad. El principal actor en estas movilizaciones fue el Movimiento Campesino, que logró unificarse nuevamente para conducir las acciones. Estas comenzaron con cortes de ruta en el interior y grandes manifestaciones que avanzaron hacia la capital del país. Las protestas duraron 16 días, paralizando el país, al cabo de los cuales el gobierno retiró todas las leyes del Parlamento.

Cabe aún explorar la unidad (o la falta de unidad) desde otro ángulo: la composición social del campesinado. En efecto, este no es un todo homogéneo. Por el contrario, tiene a su interior divisiones de clase, de raza y de género. Entre las primeras hay campesinos sin tierra (pero que aún aspiran a tenerla y por ello siguen siendo campesinos) que son trabajadores asalariados agrícolas en establecimientos mayores o que se emplean tanto en la agricultura como en los servicios en las áreas urbanas; campesinos con poca tierra que la cultivan para su subsistencia pero son total o parcialmente asalariados; campesinos que son pequeños productores; productores con más recursos que a su vez emplean esporádicamente a trabajadores agrícolas, trabajando también ellos la tierra. Aún es posible que se encuentren campesinos que trabajan la tierra pero que también son pequeños comerciantes. Luego están los cortes de raza, ya que en Paraguay aún hay comunidades indígenas de diferentes etnias que están organizadas y en parte se reconocen también como campesinos. La diferencia de género también se expresa en la existencia de varias organizaciones de mujeres campesinas. Sin embargo, ninguno de esos cortes parecería cobrar expresión en la división del campesinado paraguayo en dos grandes bloques: tanto dentro de la FNC como dentro de la MCNOC hay organizaciones de campesinos sin tierra, organizaciones de mujeres campesinas, y dentro al menos de la MCNOC está la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI) (Palau, 1996).

La división en dos grandes bloques parecería más bien el resultado de la existencia de perspectivas diferentes acerca del camino a seguir para llegar a una imagen-objetivo de la sociedad paraguaya en la cual tampoco parece haber grandes diferencias.

EL CONFLICTO

La heterogeneidad del campesinado es lo que necesariamente lleva a las organizaciones campesinas a plantear el conflicto en varios campos. Esto surge en forma evidente al repasar las plataformas reivindicativas de las Marchas de Marzo. En general ellas contienen una serie de reivindicaciones que apuntan a la satisfacción de demandas del campesinado parcelario, que son sin duda el grueso de sus adherentes: precio justo para el algodón y demás productos de la tierra; condonación de deudas y acceso al crédito agrícola; mejorar el acceso a la tecnología y a los mercados; etcétera. Pero también suelen agregarse reivindicaciones que apuntan a los reclamos de la familia rural y de

evidente peso entre las mujeres: mejoras en la educación y la salud; disminuir el costo de la canasta familiar; etcétera³⁹.

Por último está la reivindicación más fuerte de todas, la Reforma Agraria, que tiene sin duda mucho impacto entre las generaciones más jóvenes que no pueden tener acceso a la tierra si no hay planes específicos por parte del Estado. Como lo han expresado dos analistas de la situación de la pobreza rural en el Paraguay: “La solución (de la pobreza en el sector rural) requerirá de una reforma agraria profunda que tenga en cuenta la redistribución de la tierra, los insumos mejorados, la disponibilidad de crédito para pequeños agricultores, la asistencia técnica, el aumento de los niveles educativos entre la población rural, la expansión y el mejoramiento sustancial de la infraestructura (camino rurales, irrigación, etc.)” (Morley y Vos, 2000: 39). Es por eso mismo que luchan las organizaciones del Movimiento de los Campesinos.

LOS LÍMITES DEL SISTEMA

Es poco imaginable que el Estado paraguayo sea capaz de dar respuestas a los reclamos del Movimiento de los Campesinos, con las relaciones de poder existentes entre los grupos sociales en la actual estructura social. El reclamo más anti-sistémico de todos es aquel por una redistribución de la tierra, actualmente muy concentrada. Paraguay sigue siendo una sociedad agraria, y por lo tanto la posesión de la tierra sigue siendo una de las principales fuentes de riqueza y poder.

Las acciones del gobierno a través del Instituto de Bienestar Rural no han podido dar respuesta a los reclamos por tierra de los campesinos que no la tienen. Es cierto que con el impulso de las ocupaciones de tierras y de la lucha del campesinado durante la década del noventa se crearon varios asentamientos mediante la compra o la expropiación de tierras. Sin embargo, la tierra que se ha redistribuido no alcanza para revertir el proceso de concentración, según lo muestran los Censos Agrícolas.

39 En noviembre de 2001 se llevó a cabo una marcha hacia Asunción de 500 mujeres pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) que “tuvo por objeto sensibilizar a la ciudadanía ante la extrema pobreza del campo y denunciar públicamente el abandono del gobierno con respecto a la salud y la educación de miles de mujeres, niños y niñas pobres del país. [...] La marcha fue integrada [también] por indígenas de las parcialidades mbya, avá guaraní y tobas del Chaco” (CDE, *Informativo Campesino* N° 158, noviembre de 2001).

Por otro lado, la escasa industrialización del aparato productivo no crea puestos de trabajo, y las ciudades no demandan trabajadores como para esperar que la presión sobre la tierra disminuya por efectos de la emigración rural-urbana. Esta existe, pero es de campesinos desplazados que se refugian en actividades informales y de pequeño comercio apenas disimulando el desempleo. Los países limítrofes, Argentina y en menor medida Brasil, que durante muchos años absorbieron parte de la fuerza de trabajo excedentaria rural, hoy tienen sus propios problemas de desempleo y crisis productivas.

De modo que es de esperar que, favorecida por las altas tasas de crecimiento poblacional en el medio rural, la presión por la tierra no decaiga en los próximos años en el Paraguay. Una respuesta a la misma sólo es esperable con otros cambios más profundos en la estructura social y en los mecanismos de dominación política.

LA UTOPIA

“Sabemos lo que no quieren pero no sabemos bien lo que quieren. Posiblemente sueñan con un país socialista pero ¿de qué tipo? Sin latifundios, con justicia, educación y salud para todos, pero no pueden concretarlo” (Riquelme, 2002).

“Hay diferencias entre el proyecto de la MCNOC y el de la FNC. En la MCNOC se piensa que la competitividad de la agricultura campesina es baja, no pueden vivir completamente integrados a los mercados. Entonces se establece una estrategia de aguante a los embates de la política neoliberal que ellos estiman que durará diez o veinte años. Mientras es preciso mantener la tierra y producir alimentos. Aunque tampoco quieren desvincular a los campesinos totalmente del mercado. Hay que mantenerse vinculado a los mercados a través de la venta de excedentes alimentarios y de la manufactura de derivados agropecuarios y forestales en pequeña escala. Un aspecto importante para ellos es el mantenimiento de la identidad cultural guaraní. Piensan en un país productivo de base campesina cuidadoso del medio ambiente. La FNC en cambio tiene una visión de un campesinado integrado a la agroindustria (del algodón) y en general a los mercados” (Palau, 2002).

“Como todos los Movimientos tenemos nuestros sueños. Tenemos compañeros caídos en la lucha. Tuvimos varias derrotas durante la dictadura. Entonces nuestra consigna es no tran-

sigir los ideales de nuestros compañeros. Queremos una sociedad nueva. Construida desde abajo. No queremos radicalizar ni sectorizar nuestras luchas. Rechazamos a los dirigentes que radicalizan. Queremos formar nuevos líderes. Luchar contra la burocracia en las organizaciones. Hay una enfermedad de los partidos de izquierda que es plantear el socialismo ¡ya! Sin trabajar con la conciencia de la gente. Así no se llega a la gente. Para ello es preciso arrancar de sus primeras necesidades: tierras, educación, salud, precio justo por sus productos, caminos en las colonias, etc. Primero hay que motivar luego hay que concientizar” (Balbuena, 2002).

“Decimos que esta sociedad con tantas diferencias debe transformarse. Queremos una sociedad más igualitaria. El resultado de la producción debe ser distribuido a favor de la mayoría. Los recursos naturales están en manos de un pequeño grupo. Así como también los resultados del trabajo. Tenemos que avanzar hacia el socialismo. Paraguay no es un país industrial, es un país agrario, con una alta dependencia del sistema financiero y de la agroexportación. Debemos cortar con esa dependencia, creando un Estado democrático y desarrollando las fuerzas productivas. La FNC plantea reactivar la producción agrícola y generar la industrialización de los productos agrícolas entre otros del algodón. Para ello tenemos coordinaciones con pequeños y medianos empresarios industriales” (Gómez, 2002).